AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW

Matar en los barrios marginales: orden social, gobernanza criminal y violencia policial en Río de Janeiro

Beatriz Magaloni; Edgar Franco Vivanco; Vanessa Melo

Lectura 5 · DOI: 10.1017/s0003055419000856 · Año original: 2020
American Political Science Review, Página 1 de 21

doi:10.1017/S0003055419000856 © Asociación Americana de Ciencia Política 2020

Matar en los Barrios Marginales (slums): Orden Social, Gobernanza Criminal y Violencia

Policial en Río de Janeiro

BEATRIZ MAGALONI Universidad de Stanford

EDGAR FRANCO-VIVANCO Universidad de Michigan

VANESSA MELO Universidad de Stanford

Las intervenciones estatales contra los grupos criminales organizados (GCOs) a veces funcionan para mejorar la seguridad, pero a menudo exacerban la violencia. Para entender por qué, este artículo ofrece una teoría sobre la gobernanza criminal en cinco tipos de regímenes criminales: Insurgente, Bandido, Simbiótico, Predatorio y Dividido. Estos difieren según si los grupos criminales confrontan o coluden con los actores estatales, abusan o cooperan con la comunidad, y tienen un monopolio o disputan el territorio con GCOs rivales. Las intervenciones policiales en estos regímenes criminales plantean desafíos diferentes y se asocian con resultados de seguridad local marcadamente diferentes. Proporcionamos evidencia de esta teoría mediante un diseño de investigación multimétodo que combina análisis estadísticos cuasi-experimentales, análisis automatizado de textos, investigación cualitativa extensa y una encuesta de gran N en el contexto de las "Unidades de Policía Pacificadora" (UPPs) de Río de Janeiro, que buscaban recuperar el control de las favelas de las organizaciones criminales.

INTRODUCCIÓN

Los conflictos relacionados con el crimen organizado y las guerras territoriales entre pandillas han surgido como la forma más mortífera de violencia en el mundo. Este artículo caracteriza la variedad de formas de gobernanza local que

los grupos criminales organizados (GCOs) establecen en los territorios que controlan. También explora los mecanismos y procesos que permiten a la policía recuperar el control territorial y generar un orden estatal legítimo, así como las condiciones alternativas en las que las intervenciones policiales fracasan, llevando a que la violencia escale. Nuestro artículo contribuye a diversos cuerpos de literatura, incluyendo la gobernanza criminal, el conflicto, el trabajo policial, la provisión no estatal de bienes públicos y la construcción del Estado.

Los académicos generalmente coinciden en que las represalias estatales contra los GCOs a menudo resultan contraproducentes, exacerbando la violencia, desplazando el crimen e intensificando las guerras territoriales (Calderón et al. 2015; Dell 2015; Durán-Martínez 2015; Lessing 2015; Snyder y Durán-Martínez 2009; Trejo y Ley 2018). La mayor parte de esta literatura se centra en el nivel nacional o regional y no logra entender por qué las intervenciones policiales con frecuencia generan resultados heterogéneos, exacerbando la violencia en ciertos territorios pero mejorando la seguridad en otros. Para explicar por qué, este artículo adopta un enfoque de micrológica y descubre las diversas formas de autoridad local que los GCOs establecen en los territorios que controlan y que desarrollan funciones similares a las del Estado, incluyendo la resolución de conflictos, el trabajo policial, el suministro de beneficios de bienestar y la tributación. El artículo demuestra que estos regímenes criminales moldean el resultado de las intervenciones policiales.

El artículo también genera conocimiento sobre una de las intervenciones de seguridad más importantes de América Latina: las "Unidades de Policía Pacificadora" (UPPs) de Río de Janeiro. La UPP se inspiró en nociones de policía comunitaria orientada (COP) (Frühling 2007). Buscaba abandonar el enfoque "militarizado" de vigilar las favelas—expansiones urbanas informales de bajos ingresos en las que reside alrededor del 20% de la población de Río—bajo el control de pandillas de drogas y grupos paramilitares. Aprovechamos la implementación escalonada de la UPP en aproximadamente 160 favelas en las que se asignaron más de 10,000 oficiales de policía para entender los desafíos que los estados confrontan para recuperar el control territorial. Los defensores de las estrategias de "Mano Dura" argumentan que las tácticas contundentes a menudo son necesarias para mejorar la seguridad pública. Los opositores del policiamiento militarizado argumentan que este aumenta las violaciones de los derechos humanos y socava la confianza de la comunidad en la policía (Bailey y Dammert 2005; Dammert y Malone 2006; Frühling 2007; Moncada 2013a; Riccio et al. 2013). Este artículo proporciona evidencia estadística cuasi-experimental sobre las consecuencias de seguridad pública de las estrategias de policía orientada a la

comunidad (COP) en relación con las militarizadas en el contexto latinoamericano. Es el primero en demostrar que el régimen criminal preexistente moldea en gran medida cómo funcionan las estrategias de COP—por ejemplo, si estas mejoran o deterioran la seguridad local y si ganan la aceptación de la comunidad o no.

Aunque es particularmente llamativo en Río, el hecho de que comunidades vivan bajo el dominio criminal es un fenómeno común en todo el mundo. Basándonos en la literatura sobre guerras civiles y crimen organizado (Arias 2017; Arjona 2017; Gambetta 1996; Kalyvas 2006; Lessing y Willis 2019; Magaloni et al. 2017; Mampilly 2011; Popkin 1979; Staniland 2012), argumentamos que las formas de autoridad criminal varían según si los grupos criminales confrontan o coluden con los actores estatales, abusan o cooperan con la comunidad, y tienen un monopolio o disputan el territorio con GCOs rivales. Estas dimensiones generan cinco tipos de órdenes criminales: Insurgente, Bandido, Simbiótico, Predatorio y Dividido. Estos regímenes criminales no han sido caracterizados dentro de un marco teórico unificado que explique la variación en cómo los GCOs gobiernan sus territorios y las dinámicas de la violencia cotidiana, incluyendo comportamientos como la intimidación, la extorsión y el asesinato.[1]

El hampa criminal no es necesariamente una de anarquía. Cuando los GCOs monopolizan la violencia, pueden establecer formas de gobierno relativamente ordenado, suministrando resolución de conflictos y una policía local para sancionar delitos como asalto, violación, violencia doméstica y robo. Las intervenciones policiales en estos escenarios a menudo son contraproducentes. El crimen desorganizado puede ser peor para la comunidad que el crimen organizado, especialmente cuando el estado tiene un pobre control de sus fuerzas de seguridad y cuando estas fuerzas de seguridad carecen de legitimidad entre la comunidad. Pero el hampa criminal también puede ser extremadamente violenta, como cuando los GCOs pelean guerras territoriales y se involucran en tiroteos constantes, o cuando los GCOs no logran contener a sus hombres armados de cometer atrocidades contra los residentes. Los GCOs también pueden ser predatorios, extrayendo rentas de las poblaciones y negocios locales, y matando a cualquiera que se niegue a pagar. Es razonable que las intervenciones policiales deban priorizar estos tipos de entornos criminales.

No obstante, nuestro artículo sugiere que las intervenciones policiales rara vez están impulsadas por las necesidades de seguridad de las comunidades pobres. Las fuerzas policiales tienden a dirigir sus intervenciones contra los GCOs cuyas actividades son amenazantes para el estado y las clases altas—por ejemplo, criminales que se involucran en ataques terroristas para paralizar la ciudad, secuestran a los ricos, o se involucran en asesinatos selectivos de jueces, agentes

estatales y policías. Nuestra teoría propone que los resultados locales de las intervenciones policiales varían según la capacidad militar del GCO y cómo este gobierna su territorio. En los regímenes Insurgentes, los GCOs poseen alta capacidad militar, y también proporcionan seguridad y otros beneficios a los civiles para ganar apoyo. En contraste, los gobernantes Bandidos poseen menos capacidad militar para disuadir invasiones, y gobiernan sus territorios usando métodos más despiadados. Este artículo demuestra que las intervenciones policiales en los regímenes Insurgentes pueden convertir a las comunidades en zonas de guerra. Sin nadie que controle, es probable que los robos, las violaciones y los asaltos se propaguen en la comunidad. En contraste, en los regímenes Bandidos, las intervenciones policiales pueden desempeñar un papel importante mejorando las condiciones de seguridad local.

Por otro lado, los estados a menudo se abstienen de dirigir sus intervenciones contra los GCOs que adoptan estrategias de corrupción pagando a la policía, los agentes estatales y los jueces para no hacer cumplir las leyes. Snyder y Durán-Martínez (2009) argumentan que las reformas de seguridad que buscan deshacer estos contratos ilícitos—lo que ellos llaman "protección patrocinada por el estado" (racket)—con la intención de mejorar el estado de derecho es lo que a menudo causa que la violencia escale. Este artículo demuestra que este no es siempre el caso. En los regímenes Simbióticos, los GCOs comparten recursos de los mercados ilícitos con sus asociados estatales pero se comportan de manera "benigna" hacia los civiles al proporcionar seguridad local y otras formas de asistencia. Las represalias estatales contra estos regímenes tienden a resultar contraproducentes, deshaciendo una forma de gobernanza criminal que es efectiva para mantener el orden. En contraste, en los regímenes Predatorios, los GCOs forman asociaciones ilícitas con agentes estatales para extraer rentas de la comunidad, e incluso pueden participar en actividades como la trata de personas, la violencia sexual y el secuestro, las cuales realizan bajo la protección del poder judicial. Deshacer estos pactos ilícitos probablemente mejorará la seguridad local y el respeto por los derechos humanos. No obstante, como sugiere el caso de los grupos paramilitares de Río de Janeiro, los estados rara vez reprimen estos regímenes criminales.

Por último, nuestro artículo también caracteriza el resultado de las intervenciones policiales en los regímenes criminales Divididos, donde las comunidades están divididas en territorios controlados por grupos criminales rivales y están sujetas a constantes enfrentamientos armados. En estos escenarios, nuestra teoría propone que la policía a menudo emerge como un actor crítico que puede traer una solución al estado de naturaleza hobbesiano donde la vida es "brutal y corta". Por

lo tanto, en nuestro enfoque teórico, el hampa criminal es mucho más complejo que una distinción entre bandidos "estacionarios" y "errantes" (Olson 1993). En consistencia con la teoría de Olson (1993), los GCOs tienen más probabilidades de comportarse como bandidos "errantes" cuando enfrentan horizontes temporales acortados y operan bajo un gobierno disputado. Pero cuando los GCOs tienen control monopólico de un territorio, no necesariamente se comportarán como bandidos "estacionarios" porque pueden establecer formas de gobierno criminal "benignas" o tiránicas, como elaborará este artículo.

Además del régimen criminal preexistente, la capacidad del estado para recuperar el control territorial también está influenciada por el comportamiento policial. Como en Estados Unidos y otras partes del mundo, el estado confronta un problema de agencia al implementar estrategias de COP porque las prácticas abusivas de los oficiales de policía de calle pueden socavar seriamente la confianza en la policía (Hough et al. 2010; Tyler 1988). Nuestro artículo va más allá de esta literatura al explicar no solo cómo las prácticas policiales abusivas de los oficiales de la UPP socavaron la confianza en la policía, sino también el conjunto más amplio de condiciones que permiten que la policía recupere legitimidad en áreas donde los GCOs tienen el control. Cambiar el control territorial en última instancia requiere que la comunidad respalde a la policía en lugar de a los GCOs como los portadores legítimos de la fuerza coercitiva. Pero cuando los GCOs mantienen el orden más efectivamente que la policía, y cuando los residentes temen más a los oficiales de justicia penal que a los jefes criminales, las comunidades probablemente preferirán ser gobernadas por los GCOs.

Empíricamente, nuestro artículo propone una forma novedosa de hacer investigación sobre criminalidad y policiamiento que combina investigación etnográfica extensa, análisis automatizado de textos de informes criminales, una encuesta de gran N y modelado estadístico cuasi-experimental utilizando datos de indicadores criminales geocodificados manualmente. El primer desafío empírico es demostrar que el hampa criminal en las favelas de Río puede conceptualizarse de acuerdo con nuestra tipología de regímenes criminales. Esta parte del análisis se basa en investigación etnográfica en seis territorios seleccionados de acuerdo con nuestra tipología. Para ofrecer apoyo de que las percepciones de nuestros estudios de caso son generalizables, el artículo luego utiliza análisis automatizado de textos de un conjunto de datos único que consiste en miles de denuncias anónimas recolectadas por una ONG brasileña independiente, Disque Denúncia. El análisis confirma que los GCOs difieren en su comportamiento hacia el estado y

la comunidad de acuerdo con los patrones descritos por nuestra tipología de regímenes criminales.

El segundo desafío empírico es demostrar que la gobernanza criminal moldea la capacidad del estado para recuperar el control territorial. El control territorial se mide en términos de tres resultados cuantificables: (1) reducciones de los enfrentamientos armados entre los GCOs y el estado, medidos por el número de tiroteos policiales mortales y el número de oficiales de policía asesinados; (2) mejoras en la seguridad pública, incluyendo las tasas de homicidios y otros indicadores de crimen común; y (3) la legitimidad de la policía, medida con una encuesta grande (N = 5,300) realizada en favelas.

Los resultados estadísticos proporcionan un apoyo convincente a nuestra teoría. Relativo a la estrategia de policiamiento militarizado del pasado, la UPP redujo el número de tiroteos policiales mortales en un 45%. Además, los resultados demuestran que la intervención policial tuvo resultados heterogéneos. Como se esperaba, la UPP mejoró la seguridad local donde los GCOs no pudieron mantener el orden o depredaron a los residentes, como en los regímenes Dividido, Bandido y Predatorio. En los dos primeros de estos, la UPP redujo significativamente los enfrentamientos armados y los homicidios, y en el tercero, redujo la extorsión y el robo. En contraste, como se predijo, la UPP aumentó la violencia letal y los crímenes comunes en los regímenes criminales Simbióticos e Insurgentes. Nuestros resultados demuestran además que, como se esperaba, la UPP aumentó los enfrentamientos armados entre el estado y el GCO, convirtiendo los regímenes Insurgentes en zonas de guerra y atrapando a los residentes en el fuego cruzado.

Nuestros resultados de la encuesta demuestran que en las favelas donde los residentes estaban más seguros bajo el gobierno de los GCOs y el crimen se propagó con la llegada de la UPP, la comunidad considera a la UPP como ilegítima y quiere que salga de su favela. En contraste, en las favelas donde los GCOs no contuvieron el crimen y la violencia, y la seguridad mejoró como resultado de la UPP, las fuerzas policiales son percibidas como legítimas. Nuestros datos de la encuesta demuestran además que la victimización directa de los residentes por oficiales de la UPP reduce dramáticamente la aceptación comunitaria de la UPP. En general, nuestros resultados demuestran que la capacidad del estado para recuperar el control territorial está influenciada tanto por el régimen criminal preexistente como por el comportamiento policial.

EL CASO DE RÍO DE JANEIRO

Debido a las vastas fronteras terrestres de Brasil con los tres principales productores de cocaína—Colombia, Perú y Bolivia—el país es un punto de tránsito importante para el contrabando de drogas hacia Europa. Además, los sindicatos de drogas se centran cada vez más en los mercados internos (Miraglia 2015). Como resultado, las pandillas de drogas se han convertido en "una fuerza sociopolítica reconocida" en las favelas desde los años ochenta (Dowdney 2005). Tres facciones principales de drogas compiten por el control de las favelas de Río: Comando Vermelho (CV), Amigos dos Amigos (ADA) y Terceiro Comando Puro (TC). En reacción a la prevalencia de los sindicatos de drogas, también han surgido grupos vigilantes o milícias. Las milicias cobran a los habitantes y negocios impuestos de seguridad, y extorsionan dinero por servicios como agua, electricidad y gas (Cano 2013).

Como en otros países de la región, la comunidad empresarial de Río y la clase media han hecho presión para adoptar una postura dura contra los grupos criminales (Moncada 2013a). El surgimiento de un enfoque represivo contra los traficantes de drogas se produjo a fines de los años setenta. La Policía Militar (en adelante PM) es una fuerza policial civil uniformada que asume principalmente funciones de seguridad pública o policiamiento de calle. La PM difiere de la Policía Civil como una fuerza de investigación vestida de civil. La PM depende de batallones especializados como el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que está entrenado en guerra urbana, así como de equipos tácticos que operan dentro de los batallones territoriales regulares, para combatir a los traficantes de drogas. BOPE realiza sus operaciones con armamento pesado. Los oficiales del BOPE rara vez resultan heridos o mueren, y sus operaciones son conocidas por la violencia y la "eficiencia". En 1995, un gobierno de derecha instituyó un "premio a la valentía" que recompensaba a los oficiales de policía por matar. Aunque el premio finalmente fue eliminado, persiste una cultura institucional que recompensa la violencia policial.

Esta estrategia de policiamiento militarizado resultó en niveles exorbitantes de tiroteos policiales mortales. La PM de Río es una de las más violentas del mundo—la policía ha matado a más de 13,000 personas en el estado entre 2003 y 2017, incluyendo 1,127 en 2017.[2] Los asesinatos policiales afectan tanto a criminales como a residentes, quienes a menudo resultan heridos o muertos en el fuego cruzado. En varias ocasiones, los oficiales de policía han matado a niños, mujeres y hombres inocentes para vengar las muertes de otros oficiales de policía. La PM ha justificado sus asesinatos con el argumento de la legítima defensa o "resistencia al arresto" (Auto de Resistência). El sistema de justicia penal prácticamente nunca investiga o castiga estos asesinatos (Brinks 2007). Los

asesinatos por la policía son respaldados por la sociedad brasileña. Según una encuesta nacional realizada en 2015, más del 50% de la población brasileña está de acuerdo con la frase común "Bandido bom é bandido morto" (Un buen criminal es un criminal muerto).[3]

En anticipación a la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el estado instituyó las UPPs, cuya misión era recuperar el control del territorio de los sindicatos de drogas. Se asignaron oficiales jóvenes con la idea de que vendrían con una mentalidad fresca, no socializados en el enfoque "militarizado" tradicional. El entrenamiento incluía principios de derechos humanos y estrategias de policía comunitaria orientada (COP) como patrullas continuas y policiamiento proactivo. El objetivo era establecer una relación más "próxima" con los residentes de las favelas y reducir los enfrentamientos armados. La forma en que estos conceptos se implementaron varió de una unidad a otra según los estilos de liderazgo de los comandantes de la UPP. Los comandantes usaban estrategias diversas, incluyendo la provisión de servicios como clases de fútbol y karate para niños y jóvenes. Otros asignaban oficiales para participar en resolución de conflictos, principalmente arbitrando peleas entre vecinos sobre el uso del espacio, la eliminación de basura, el ruido, etc. La mayoría de los comandantes realizaban reuniones con la comunidad para discutir las condiciones de seguridad. Estas estrategias corresponden en líneas generales a la COP (Frühling 2007).

Esta intervención implicó una "invasión" inicial preanunciada por unidades de operaciones especiales, incluyendo el BOPE y a veces el ejército. Después de algunos meses de "estabilización", los oficiales de policía de la UPP fueron asignados permanentemente. El programa comenzó en 2008 en la favela Santa Marta y se expandió gradualmente a más de 160 favelas.[4] La primera etapa de la "pacificación" incluyó las favelas de la zona sur junto a los barrios de clase alta de Ipanema, Leblon y Copacabana, así como las favelas cerca del estadio Maracaná. La intervención en el Complexo do Alemão—el cuartel general del CV—marcó el comienzo de la segunda etapa de la "pacificación". El ejército ocupó Alemão por más de un año y medio hasta que se instalaron ocho UPPs en 2012. Una tercera etapa comenzó cuando la gran favela de Rocinha, el corazón del ADA, fue ocupada en 2012. El arresto del señor de la droga de Rocinha ocurrió sin disparar una bala. La ocupación del Complexo da Maré—una gran área en el norte de Río—marcó el final de la "pacificación". El Ejército ocupó Maré de abril de 2014 a junio de 2015. Aunque su objetivo era establecer condiciones seguras para la implementación de la UPP, no tuvieron éxito en última instancia.

La UPP no estuvo acompañada de una expansión de infraestructura y programas de bienestar social. Durante un par de años, hubo una llamada UPP social, pero el

dinero pronto se agotó y la policía quedó sola para lidiar con problemas socioeconómicos complejos. Como se observa en la Figura 1, entre 2008 y 2013, los asesinatos por la policía disminuyeron en más de un 68% y los homicidios disminuyeron en un 40%. Después de 2013, la violencia policial letal comenzó a aumentar, alcanzando 1,127 muertes en el estado y 527 solo en la capital en 2017, que es casi tan alto como los niveles previos a la UPP. El número de muertes policiales también disminuyó de 43 oficiales en 2003 a siete en 2011. Desde ese año, este número ha subido a un total de 38 muertes policiales en 2016.

Figura 1. Violencia Letal

ENFOQUE MULTIMÉTODO

Realizar investigación sobre el dominio criminal es una cuestión compleja debido a los peligros que plantea tanto para los investigadores como para sus sujetos. Para superar estos obstáculos, nos basamos en una combinación de estrategias.[5] Primero, formamos asociaciones con residentes locales y ONGs, lo que facilitó el acceso a seis territorios que fueron seleccionados de acuerdo con nuestra tipología: Simbiótico (Rocinha), Predatorio (Batán), Insurgente (Complexo Alemão), Bandido (Providência) y Dividido (Maré y Cidade de Deus). La Figura 2 muestra las favelas de Río, las áreas de nuestra investigación y los territorios que recibieron una UPP. Realizamos entrevistas semiestructuradas y grupos focales, así como una encuesta de gran N (N = 5,300). Para realizar la encuesta, contratamos a un grupo de residentes de cada una de estas áreas y los entrenamos como enumeradores.

Figura 2. Distribución Espacial de las UPPs en Río de Janeiro

Nota: Favelas (gris claro) y UPPs (gris oscuro) en Río de Janeiro. Las líneas más gruesas representan la división de la ciudad en batallones de policía (AISP), los cuales a su vez se subdividen en Delegacias (DP). Etiquetamos las áreas donde realizamos nuestro trabajo de campo.

Segundo, formamos asociaciones con la Secretaría de Seguridad y la PM. Esto nos permitió entrevistar a oficiales de muchas UPPs, BOPEs y batallones territoriales. Entrevistamos a todos los Comandantes Generales de las UPPs de Río desde su creación, a los Comandantes Generales de la PM, a casi la mitad de los comandantes de las unidades de la UPP y al Secretario de Seguridad de Río. Nuestra asociación con la PM también nos dio acceso a información de inteligencia y datos criminales detallados. Pudimos acompañar a los oficiales en los patrullajes y también participar en reuniones a puertas cerradas.

Tercero, para generalizar más allá de nuestros estudios de caso, utilizamos análisis automatizado de textos de Disque Denúncia (DD), una línea directa anónima de 24 horas que es frecuentemente utilizada por los residentes de las favelas. Disque Denúncia ha estado recolectando informes de los ciudadanos sobre actividad criminal y abuso policial desde 1995 y ha recibido más de dos millones de denuncias. Finalmente, para probar nuestra teoría sobre los resultados heterogéneos de las intervenciones policiales, realizamos análisis estadísticos cuasi-experimentales utilizando indicadores de crimen.

TEORÍA DE LOS REGÍMENES CRIMINALES

La forma de autoridad local que los GCOs establecen varía según tres variables: el grado de control territorial, la relación con el estado y la relación con la comunidad.

Control Territorial

Los GCOs aspiran a controlar territorios que son valiosos. Los traficantes de drogas buscan el control de áreas adecuadas para el cultivo de drogas, ubicaciones estratégicas (por ejemplo, puertos, pasos fronterizos y autopistas para transportar drogas y armas) y áreas urbanas cercanas a los mercados de consumo. Los GCOs a menudo buscan el control activo de un territorio no solo para extraer ganancias de los mercados ilícitos conectados a esa área, sino también para protegerse de otros GCOs y del estado. Dado que los acuerdos entre grupos criminales son difíciles de hacer cumplir, los GCOs aspiran a retener el control monopólico de estos territorios (Magaloni et al. 2017).

Un primer factor que determina la naturaleza de los regímenes criminales se relaciona con si los GCOs disputan territorio con sus rivales o tienen control monopólico. En línea con Olson (1993), el control monopólico crea la expectativa de cooperación continua que puede beneficiar al actor armado a largo plazo (Arjona 2017; Mampilly 2011; Metelits 2009; Staniland 2012). Bajo el control monopólico, los horizontes temporales son más largos y los GCOs tienen más probabilidades de invertir en gobernanza porque pueden estar más seguros de cosechar ganancias futuras. En contraste, donde los grupos criminales disputan territorio, los horizontes temporales son más cortos, socavando así los incentivos para establecer acuerdos de colaboración que puedan beneficiar al grupo armado a largo plazo.

Relaciones con el Estado

Los GCOs también varían en la forma en que interactúan con el estado, desde "asociación activa hasta tolerancia mutua y discordia violenta" (Moncada 2013b, 229). Seguimos a Barnes (2017) al distinguir tres tipos de GCOs según la forma en que interactúan con el estado: GCOs que enfatizan la confrontación violenta, GCOs que principalmente siguen una estrategia de evasión del cumplimiento, y aquellos grupos criminales que siguen una estrategia de integración con el estado.

Los GCOs confrontan al estado no para derrocarlo o separarse, sino para influir en las políticas respecto al cumplimiento (Lessing 2015). La confrontación puede resultar de la ruptura de un acuerdo previamente colaborativo con el estado, como fue el caso de los cárteles mexicanos de la droga durante la administración de Calderón. En otras ocasiones, la escalada de la violencia es episódica y descentralizada. Por ejemplo, los traficantes de drogas y la PM en Río a menudo se involucran en espirales de violencia y venganza. Un ejemplo fue la masacre en la Iglesia de Candelária, donde en 1993 un escuadrón de la muerte policial exterminó a ocho niños después del asesinato de un oficial de policía. Un mes después, los oficiales de policía asesinaron en total a 21 personas desarmadas en la favela de Vigário Geral (Glenny 2015). Los traficantes de drogas respondieron a estas masacres intensificando su violencia contra la policía. Aquí, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es otra razón por la cual la violencia GCO-estado escala (Durán-Martínez 2015).

En la evasión del cumplimiento, el estado usa sus mecanismos tradicionales de cumplimiento para combatir a los GCOs, quienes responden intentando evadir el cumplimiento (Lessing 2015). Los GCOs y el estado siguen siendo entidades separadas pero cooperan a través de sobornos. La diferencia entre la evasión del cumplimiento y la integración, según Barnes (2017), es que en la integración, los miembros del grupo criminal son incorporados directamente al aparato estatal. Algunos ejemplos incluyen la Cosa Nostra italiana, la Camorra napolitana, los grupos paramilitares colombianos y las pandillas mexicanas de drogas.

Aunque cada GCO se involucra en una combinación de estrategias de corrupción y confrontación, los GCOs tienden a enfatizar una sobre la otra. Más que cualquier otro sindicato de drogas que opera en Río, el CV ha enfatizado las estrategias de confrontación violenta con el estado. El CV surgió en una prisión al sur de Río, donde el régimen militar encarceló a algunos de los criminales más violentos junto a prisioneros políticos del M-18 y la Alianza Libertadora Nacional (ALN). Las condiciones de encarcelamiento eran extremadamente crueles. Cuando estos criminales regresaron a las calles, ahora usaban el lenguaje de la justicia social para justificar sus actividades criminales (Amorim 1993). También salieron con nociones únicas de jerarquía, organización, tácticas armadas y una ideología

antistatal. El CV es conocido por ofrecer dinero para asesinar policías[6] y, en muchas ocasiones, ha paralizado la ciudad haciendo estallar bombas, quemando autobuses y volando edificios de la PM.

El ADA también nació dentro de la prisión, donde un famoso señor de la droga, Uê, el fundador y líder del TC, y Celsinho de Vila Vintém, unieron fuerzas para formar una nueva facción criminal destinada a socavar el dominio del CV y convertirse en el principal proveedor de drogas en Río (Amorim 2003). Con el ADA, Celsinho se convirtió en el traficante de drogas más poderoso de la zona oeste. Mantenía una relación cercana con la policía, la cual servía al ADA en diferentes capacidades—desde mantener a los oficiales de policía fuera de sus territorios hasta hacer que sirvieran como guardaespaldas personales (Penglase 2008).

Las milicias de Río, por su parte, se han integrado con el estado. Las milicias están compuestas por ex oficiales de policía, bomberos y guardias de prisión que prometen eliminar a las pandillas de drogas y proporcionar seguridad a los ciudadanos. En realidad, su objetivo es la ganancia económica, gravando duramente a las comunidades y cobrando impuestos por seguridad y servicios públicos básicos (Cano 2013). Las milicias vinculadas a la policía están directamente relacionadas con numerosos políticos en el parlamento de la ciudad. Explotan su control territorial para ganar electorados de votantes (Hidalgo y Lessing 2015). Las milicias también trafican drogas y armas, y controlan cientos de comunidades en Río.

Relaciones con la Comunidad

La autoridad criminal local también difiere según la naturaleza del contrato, que va desde cooperativo hasta tiránico, que el GCO establece con la comunidad. El GCO busca ganar la aceptación de la comunidad en el primero, mientras que los GCOs establecen formas abusivas de gobernanza en el segundo.

En el caso de Río, las pandillas de drogas han desarrollado tradicionalmente relaciones cooperativas con la comunidad. Dependen de informantes locales para servir como sus "ojos y oídos" y para alertarlos de cualquier actividad sospechosa. También contratan fogueteiros, quienes normalmente están ubicados en puntos de entrada estratégicos, para monitorear de cerca quién entra y sale de la favela.

Para ganar la colaboración de la comunidad, los señores de la droga de Río a menudo proporcionan asistencia en forma de comida, medicinas y préstamos. También regulan rutinas básicas, como el acceso a las favelas. Algunos incluso prohíben a los residentes usar colores asociados con sus rivales. También regulan

las actividades comerciales—por ejemplo, los permisos para los moto-taxis, los vendedores ambulantes y los puestos de comida. Pero las funciones de gobernanza más importantes que los señores de la droga proporcionan son la resolución de conflictos y el policiamiento. El tribunal do tráfico (tribunal de los traficantes de drogas) es un sistema de justicia retributiva donde los señores de la droga castigan los delitos criminales, incluyendo el robo y la violencia doméstica, mediante palizas, arresto domiciliario, asesinatos e incluso la expulsión de la comunidad. Este sistema informal de justicia es rápido y efectivo, aunque a veces tiránico (Arias y Rodrigues 2006).

Estas prácticas de gobernanza criminal son comunes en todas las favelas de Río, pero los métodos varían. Un factor importante a considerar es la personalidad del señor de la droga. Algunos señores de la droga son llamados "héroes", pero otros son temidos por sus métodos tiránicos. Por ejemplo, un famoso señor de la droga afiliado al CV, "Dudu", quien por un corto período en los años noventa gobernó Rocinha, era conocido como un psicópata y un violador notorio (Glenny 2015, 119). Los residentes de Rocinha lo recuerdan por su crueldad temible, pero recuerdan con nostalgia a otros señores de la droga como "Lulu", también del CV. De manera similar, Orlando Jogador, un señor de la droga de Alemão, todavía es recordado por la forma en que trataba a la comunidad, como un proveedor de justicia social y bienestar.

Además, el grado de colaboración GCO-comunidad también depende de si los criminales son criados en el barrio o vienen de otros lugares. Las pandillas de drogas de Río están compuestas principalmente de criminales con fuertes lazos comunales con la favela. Los códigos morales y un sentido de solidaridad unen a estos criminales con sus comunidades. Los residentes a menudo se referían a ellos como "los muchachos", reflejando el hecho de que crecieron con ellos. Las milicias de Río, en contraste, vienen principalmente de fuera de la comunidad y no tienen el mismo nivel de arraigo social que los traficantes de drogas.

La colaboración GCO-comunidad también está moldeada por la fuerza de la comunidad, como en Arjona (2017). La autora argumenta que cuando los civiles son capaces de ejercer resistencia colectiva, los grupos rebeldes establecen contratos sociales menos intrusivos. Este argumento puede extenderse a los gobernantes criminales. La mayoría de las favelas son comunidades muy unidas con vidas sociales vibrantes (Perlman 2005). Las pandillas de drogas comúnmente acomodan ciertos niveles de independencia dentro de la comunidad y negocian con las asociaciones comunitarias (Arias 2017). "Lulu" de Rocinha, por ejemplo, estableció un consejo para mediar los conflictos entre sus gerentes y soldados, así como entre los traficantes y los líderes comunitarios (Glenny 2015, 102). Sin

embargo, las comunidades en otras favelas no están tan unidas como Rocinha. Las milicias de Río se han expandido más hacia las comunidades del oeste y del norte, muchas de las cuales fueron formadas por patrones de migración más recientes. Estas comunidades tienden a ser significativamente menos cohesivas que las favelas ubicadas en el corazón de Río.

Un aspecto final a considerar es la organización criminal. Los criminales no solo están motivados por la codicia y las ganancias, sino que también buscan prestigio y poder dentro de sus organizaciones. Los señores de la droga más exitosos dentro del CV tienen cientos de hombres armados bajo su mando y llevan a cabo invasiones para expandir los territorios del CV. Estos "guerreros criminales" son promovidos a posiciones de alto rango, algunas de las cuales les otorgan el control de favelas dentro del cuartel general del CV. Un ejemplo es "FB" da Silva, que era famoso por comandar a cientos de hombres e invadir con éxito muchas favelas. Fue promovido a señor de la droga de Complexo da Penha, en Alemão. Aunque estos guerreros criminales sirven bien al GCO para pelear, es probable que sean impredecibles, caprichosos y violentos sin un liderazgo fuerte que los controle.

Un líder indiscutible, "Marcinho-VP", ha dirigido el CV desde la prisión desde los años noventa (Amorim 1993, 2003). Él monitorea de cerca a un puñado de capos de la droga para supervisar las operaciones generales dentro de la organización. Debido a la importancia de Alemão y su estatus como cuartel general del CV, Marcinho-VP ha establecido procesos para responsabilizar a los señores de la droga locales ante él, asegurando que mantenga controlados a los hombres en la jerarquía más alta de la organización. En ocasiones, los señores de la droga dentro de Alemão han sido ejecutados por no seguir las órdenes de Marcinho. Un ejemplo fue Tota, cuyo reinado en Alemão duró de 2005 a 2008, cuando fue aparentemente asesinado tras las órdenes de Marcinho-VP debido a sus formas viciosas de tratar a los residentes locales.[7] Marchino-VP también da órdenes a señores de la droga fuera de Alemão.[8] Generalmente, estas órdenes son estratégicas, centrándose más en la organización como un todo y menos en las operaciones diarias o en cómo un señor de la droga maneja su favela (Penglase 2008).

Mapeando la Gobernanza Criminal y las Hipótesis

Estas tres dimensiones producen cinco tipos de dominio criminal, como se ilustra en la Figura 3. Los gobernantes Insurgentes y Bandidos enfatizan la confrontación violenta en sus estrategias hacia el estado, pero difieren en cómo interactúan con la comunidad: mientras que los primeros establecen prácticas de gobernanza colaborativa, los segundos victimizan a los residentes. Las razones por las que

colaboran o no con la comunidad varían, como se explicó anteriormente, según la personalidad del liderazgo, la fuerza de la comunidad y la organización criminal. Tanto los regímenes criminales Simbióticos como Predatorios establecen acuerdos colusorios con el estado, pero difieren en cómo se relacionan con la comunidad. Los gobernantes Simbióticos conducen sus actividades ilícitas cooperando con la comunidad. Mientras tanto, los gobernantes Predatorios usan el respaldo del estado para depredar a los residentes y extraer rentas de ellos. En los regímenes criminales Divididos, dos o más GCOs disputan el control territorial, dividiendo a las comunidades en regímenes micro-armados paralelos.

Figura 3. Tipología de los Regímenes Criminales

Nuestro enfoque teórico propone que el régimen criminal existente influye, primero, en dónde dirigirá el estado sus represalias. Estas represalias atacarán principalmente a los GCOs que enfatizan la confrontación violenta sobre la colusión. A su vez, el estado protegerá a los GCOs que establecen asociaciones duraderas con oficiales de policía, jueces y funcionarios gubernamentales. Las intervenciones policiales contra los GCOs que enfatizan la confrontación violenta podrían incluso asemejarse a operaciones militares que implican altos niveles de fuerza. En contraste, donde los GCOs colaboran con el estado, las intervenciones policiales incluso podrían negociarse de antemano y ocurrir sin que la policía dispare un solo tiro.

En términos de la dinámica de la intervención, es razonable esperar que, en contraste con las estrategias de policiamiento militarizado, los enfoques de COP deberían reducir los enfrentamientos armados entre los GCOs y la policía, así como la frecuencia de los tiroteos policiales mortales. Sin embargo, el efecto de las estrategias de COP sobre los tiroteos policiales mortales está mediado por cómo responde el GCO. Los GCOs pueden responder a las intervenciones policiales con violencia, sobornando a la policía, o reubicándose a donde puedan esconderse del estado.[9] Si los GCOs responden con violencia—por ejemplo, matando a oficiales de policía—las estrategias de COP difícilmente son viables. Es razonable que cuando se mata a oficiales de policía, es probable que estos respondan por ira y un deseo de retribución, y porque se sienten vulnerables y necesitan disuadir agresiones futuras. Las respuestas de los GCOs dependen de sus orientaciones organizacionales. Nuestra teoría propone que es probable que el CV responda predominantemente matando a los oficiales de policía de primera línea de la UPP, mientras que el ADA responderá sobornándolos. Las respuestas de los GCOs también dependen de su capacidad para contraatacar versus huir. Esperamos que el CV responda con más violencia en su cuartel general de

Alemão, donde tienen mayor capacidad militar, que en el resto de sus favelas donde los señores de la droga del CV podrían responder mejor huyendo.

El régimen criminal preexistente también moldea cómo las intervenciones policiales afectarán el orden social y el crimen común. Manteniendo constante el comportamiento policial, nuestro enfoque teórico propone que las intervenciones policiales tienen más probabilidades de mejorar la seguridad local en los regímenes Dividido, Bandido y Predatorio. En los dos primeros, esperamos reducciones de homicidios y violencia cotidiana; mientras tanto, en los regímenes Predatorios, esperamos reducciones en los niveles de extorsión. En contraste, en los regímenes criminales Insurgentes y Simbióticos, las intervenciones policiales socavarán regímenes criminales que son efectivos en proporcionar seguridad local. Las represalias estatales en estos regímenes podrían producir el resultado paradójico de propagar el crimen en la comunidad, al menos hasta que la policía pueda llenar el vacío dejado por los señores de la droga.

Las fuerzas policiales a menudo tendrán dificultades para llenar el vacío dejado por los GCOs por cuatro razones principales. Primero, la policía carece de conocimiento local sobre quién es quién en la comunidad y la naturaleza de las dinámicas interpersonales, que los señores de la droga conocen bien. Este vacío es naturalmente más difícil de llenar en comunidades más grandes donde es difícil llegar a conocer a todos. Segundo, los sistemas informales de justicia y policiamiento usados por los GCOs son a menudo más accesibles, rápidos y efectivos para resolver conflictos como violaciones, robos y asesinatos que los sistemas formales de justicia, que generalmente están demasiado alejados e intimidan a las comunidades pobres y segregadas. Un tercer desafío para la policía es que, donde las instituciones son débiles, la confianza depende del conocimiento personal de los individuos a cargo. Los cambios frecuentes de comandantes policiales, como reveló nuestro trabajo de campo, trabajaron para interrumpir la confianza entre la UPP y la comunidad. Cuarto, es difícil para la policía construir confianza donde hay una historia de segregación racial y las fuerzas policiales han sido utilizadas como instrumentos de represión.

Por último, la capacidad del estado para recuperar el control territorial a través de estrategias de COP también está moldeada por el comportamiento de los oficiales de policía de calle en sus interacciones cotidianas con los residentes. Con suficiente tiempo, la policía podría ser capaz de ganar suficiente conocimiento local y confianza comunitaria para llenar el vacío de gobernanza dejado por los señores de la droga. Pero si los oficiales de policía son abusivos y violentos, es poco probable que ganen la confianza de la comunidad. La siguiente sección discute cómo cada uno de estos regímenes criminales se valida empíricamente en

el caso de Río. Los estudios de caso transmiten las voces de los residentes que entrevistamos, principalmente relacionadas con su experiencia con la violencia cotidiana.

ESTUDIOS DE CASO

Régimen Criminal Insurgente

Hay una línea de erudición en Brasil que conceptualiza a los traficantes de drogas como "insurgentes criminales", llamando la atención sobre cómo, durante la dictadura militar, los criminales fueron socializados con prisioneros políticos, traduciendo la lucha del ámbito de la política (insurgentes izquierdistas) al ámbito de la economía (insurgentes criminales) (Burgoyne 2011; Holston 2009; Killebrew 2011; Sullivan 2000). Aunque coincidimos con Lessing (2015) en que esta conceptualización podría sobreestimar la importancia de la ideología para el CV, todavía encontramos útil el concepto. En nuestro enfoque, lo que define a un insurgente criminal es una combinación de factores: (1) alta capacidad militar que permite a los criminales atrincherar sus territorios, (2) el uso de estrategias terroristas, y (3) el hecho de que gobiernan sus territorios buscando ganar la colaboración de la comunidad. Una ideología particular que busca "justicia y paz" para los pobres urbanos podría ser útil para obtener la colaboración de la comunidad, pero no es necesaria.

El CV llevó su "lucha" contra los funcionarios estatales de las prisiones a las calles en los años setenta. El debut del CV fue un incidente más tarde conocido como "Cuatrocientos contra uno", cuando una célula criminal luchó contra la PM toda la noche con armas semiautomáticas en un complejo de apartamentos. Después del incidente, el estado concluyó que necesitaba urgentemente aumentar la capacidad militar de la policía para confrontar a estos criminales (da Silva Lima 2001). A lo largo de los años, el CV mantendría su postura violenta contra el estado, mientras se expandía a más del 70% de las favelas de Río (Amorim 1993). Mientras tanto, el estado continuaría escalando su violencia con unidades tácticas, como el BOPE, entrenadas en contrainsurgencia.

Marcinho-VP se convirtió en el señor absoluto de la droga del CV, gobernando Alemão desde los años noventa desde la prisión (Amorim 1993, 2003). Fue arrestado en 1992, pero da órdenes a sus manos derechas en Alemão y maneja de cerca las actividades de tráfico de drogas en todo el estado. Marcinho-VP ordenó la mayoría de los ataques que hicieron estallar bombas, quemaron autobuses y destruyeron edificios policiales. Durante los Juegos Panamericanos de 2007, una

"guerra" sin precedentes que involucró a la policía, el ejército y la marina tuvo lugar en Alemão, dejando a muchos muertos. Alemão fue considerado bajo sitio.

En noviembre de 2010, el estado decidió apuntar a Alemão para la "pacificación" con sus trece favelas y alrededor de 200,000 habitantes. La invasión no formaba parte del plan original, sino que fue desencadenada por un ataque terrorista a mediados de noviembre de 2010 (Beltrame 2014). El ataque terrorista aparentemente ocurrió porque el CV estaba protestando contra la invasión de su territorio por las milicias y el hecho de que la mayoría de las UPPs habían sido enviadas a favelas controladas por el CV. Alemão fue ocupado por una fuerza de 1,200 oficiales de la PM, 400 policías civiles, 300 policías federales y 800 miembros del ejército brasileño. El ejército brasileño ocupó Alemão durante alrededor de un año y medio hasta que se introdujeron ocho UPPs a mediados de 2012.

Nuestras primeras entrevistas con los residentes de Alemão tuvieron lugar el día en que el ejército brasileño estaba saliendo del área y las UPPs estaban llegando. Antes de la intervención militar, la policía rara vez entraba a Alemão, y cuando lo hacía, sonaban las sirenas para que todos pudieran esconderse. Una residente informó que "la policía casi nunca entraba al territorio y rara vez experimentábamos tiroteos". Cuando se le preguntó a quién temía más, si a la policía o a los traficantes de drogas, una mujer respondió: "Temo más a la policía. La policía solo viene aquí a matar. Los traficantes cuidan de los residentes". Los traficantes del CV aprendieron que era mejor para el negocio de las drogas tener a la comunidad de su lado. Crearon el lema "Paz, Justicia y Libertad", que luego fue ampliamente difundido e incorporado por los residentes en los territorios del CV. Los traficantes de drogas entregarían bienestar social en forma de salud, efectivo e incluso comida. La misma mujer explicó:

Si el residente se enfermaba, necesitaba medicación y no podía pagar la medicina, llevaban la receta a la boca de fumo y ellos [los traficantes] la compraban. ¿No había gas? Iban a los traficantes a pedir gas y ellos lo daban. … Entonces, el residente los ve como héroes.

Ampliando las reglas de su fudão (orígenes) en prisión, que prohibía a los reclusos atacarse, robarse o violarse entre sí, el CV instituyó un sistema de reciprocidad forzada en las favelas "por el cual los traficantes proporcionaban seguridad, prohibiendo el robo o la violación, a cambio del silencio o la complicidad de los residentes" (Penglase 2008, 129). Nuestros informantes en Alemão coincidieron en que el CV proporcionaba estabilidad y orden. Un residente que vivía frente a una de las bocas de fumo[10] explicó que todos los días veía a cientos de traficantes

de drogas con armas pesadas, pero se "sentía seguro porque los traficantes nunca nos hicieron nada". Con respecto al crimen común, los traficantes mantenían las cosas bajo control. Otro residente informó que antes de la "pacificación", "nadie se atrevía a desobedecer por miedo al tribunal de los traficantes. Los ladrones eran expulsados de la comunidad o asesinados, y también los violadores".

Las estrategias de COP son difícilmente viables en este tipo de régimen criminal. Por un lado, los oficiales de policía son demasiado vulnerables en el terreno. Los primeros oficiales de policía que murieron en una asignación de la UPP fueron asesinados en Alemão a fines de 2012. Un comandante de una de las UPPs en Alemão explicó: "Los traficantes usan estrategias de guerra contra nosotros. Nos tienden emboscadas para matarnos …. todo les está permitido en esta guerra. En cambio, ¿se supone que nosotros debemos seguir las reglas?" En una entrevista con el Comandante General de las UPPs de Río en ese momento, aprendimos que el asesinato de esos oficiales de policía había convencido a la PM de que necesitaban desplegar oficiales de policía mejor entrenados a las UPPs, incluyendo BOPEs.

Los enfrentamientos armados entre el CV y la policía pronto escalaron, causando víctimas fatales en ambos lados. La UPP expuso a la comunidad a un fuego continuo. Uno de los momentos más perturbadores de la intervención en Alemão fue la muerte de un niño de 10 años, Eduardo de Jesus, quien fue asesinado en el fuego cruzado en el umbral de su casa. Un año después, cinco residentes fueron fusilados y dos más resultaron heridos durante intensos tiroteos. Un día después, otro niño fue asesinado. Los enfrentamientos con la policía interrumpieron la vida de todos y a menudo duraban horas. Un residente lamentó: "No podemos descansar sabiendo que en cualquier momento, una guerra puede estallar o que un oficial de policía puede matar a nuestros hijos". Otro residente nos dijo: "La vida para nosotros se ha convertido en revisar cada momento para ver si podemos oír el sonido de los disparos".

En este entorno, la policía no puede llenar el vacío de gobernanza dejado por los señores de la droga porque los residentes están aterrorizados de ellos. Debido a que la policía es percibida como una fuerza de ocupación coercitiva, pocos residentes ofrecen información voluntariamente. No es sorprendente que en nuestras entrevistas escucháramos quejas de que con la UPP el crimen común dentro de Alemão aumentó significativamente. Un residente lamentó:

Antes de la UPP, la gente no andaba apuñalándose con cuchillos porque los bandidos los habrían matado. El bandido necesita estar presente para evitar peleas entre los residentes, para prevenir robos dentro de la favela, para prevenir

violaciones … La policía no puede hacer nada. Entonces, necesitamos al tráfico para organizar las cosas.

La mala conducta policial también desempeñó un papel en alimentar la desconfianza. Los residentes se quejaron de ser "cacheados sin razón", "abofeteados en la cara", "tirados del cabello" y de ser "tratados con arrogancia". Estos comportamientos dañaron aún más la legitimidad de la UPP. Una mujer de 50 años articuló con fuerza por qué: "No vamos a deshacernos de un bandido para entregarnos a otro. ¿Entiende?" Esta mujer se quejaba específicamente de la corrupción policial, argumentando que la UPP en Alemão se estaba comportando como las milicias de Río, cobrando dinero a los residentes por todo, incluyendo "cada vez que queremos celebrar una fiesta o tener la banda tocando".

Régimen Criminal Bandido

El CV se describe con mayor precisión como una asociación laxa de traficantes de drogas que se unen para asistencia recíproca pero actúan con un gran grado de autonomía. Reúne un conjunto de símbolos de identidad común, una estrategia general y un conjunto de supuestos sobre cómo interactuar con otros criminales, con los residentes de los barrios pobres y con el estado (Penglase 2008). Pero los jefes de la droga a nivel de la favela tienen un amplio grado de autonomía local, y por esa razón, hay una variación considerable en las prácticas entre quienes se consideran parte del CV. Carecen del mismo nivel de control y supervisión del liderazgo del CV.

El CV está mejor preparado para ayudar a los miembros a luchar contra las pandillas rivales que para ayudar a resolver las luchas internas. La pérdida de una favela ante un rival puede dañar a la organización en su conjunto, dificultando la distribución de armas, drogas y mano de obra. Pero las rivalidades entre señores de la droga dentro de las favelas se consideran menos importantes siempre que reclamen membresía en el CV (Penglase 2008). Además, debido a que no tienen la misma capacidad militar que en Alemão, estos señores de la droga también son más vulnerables. En línea con la lógica de Olson, su mayor vulnerabilidad acorta sus horizontes temporales y los hace comportarse de maneras más abusivas hacia la población.

Un ejemplo es la favela de Providência, ubicada en el corazón de la ciudad. Providência tiene raíces que se remontan a finales del siglo XIX, cuando esclavos libertos y sobrevivientes de la guerra de Canudos se asentaron allí por primera vez. El CV ha controlado el área desde los años ochenta. La favela llegó a ser considerada una de las más peligrosas de la ciudad, con señales de violencia ya en 1948. Antes de la intervención de la UPP en 2010, Providência había

experimentado dos invasiones del ejército. En 2006, la favela soportó 10 días de operaciones con más de 200 soldados y, en 2008, el Ejército volvió a ocupar la favela.

En nuestro trabajo de campo, escuchamos numerosas quejas de los residentes contra los traficantes de drogas, algunas de las cuales se refieren a la promulgación de decisiones excesivamente crueles en el tribunal del señor de la droga y el uso de violencia arbitraria—por ejemplo, asesinando a residentes a sangre fría por meras sospechas. Nuestros informantes compartieron algunos de los siguientes ejemplos:

No hace mucho, había un joven de 17 años jugando todo el día. Después de que los traficantes descubrieran que el chico era de una favela que pertenecía al ADA, le cortaron la oreja. Pusieron la oreja dentro de un frasco e hicieron que el muchacho caminara con ella por la Estação Central. Un niño de 7 años trajo el cuchillo para que los traficantes le cortaran la oreja.

Otro residente informó que los traficantes en Providência siempre castigaban a los ladrones, como hacen los señores de la droga en la mayoría de las favelas. Pero explicó que primero cortaban sus partes del cuerpo para hacerlos sufrir antes de matarlos. Otros residentes informaron que los traficantes "quemaban vivos a los residentes" si sospechaban que eran espías. Otros también dijeron que los traficantes "expulsaban a los residentes de sus hogares y de la favela por meras sospechas". Debido a que los residentes informaron que temían a los traficantes, muchos optaron por no recurrir al tribunal do tráfico para resolver disputas. Por ejemplo, una mujer informó que era mejor mantener los problemas relacionados con la violencia doméstica lejos de los traficantes por miedo a que mataran a sus parejas. Debido a que cualquiera podía ser sospechoso, era mejor mantener distancia, y así muchos optaban por no denunciar nada.

No es sorprendente que escucháramos evaluaciones más positivas sobre la UPP en Providência que en Alemão. Una mujer explicó cómo habían mejorado las cosas con la UPP: "Antes, había escenas siniestras en la boca de fumo frente a mi casa, muchos cuerpos muertos tirados allí y los cuerpos siendo removidos. Estas cosas ya no suceden". Sin embargo, como en Alemão, los residentes también expresaron preocupaciones sobre el comportamiento policial. De hecho, justo antes de la recolección de nuestra encuesta, hubo un incidente capturado en video por un residente local y luego difundido a través de las redes sociales. En el video, los oficiales de policía de la UPP en Providência fusilaron a un residente desarmado y luego colocaron un arma sobre su cuerpo.

Régimen Criminal Simbiótico

Como régimen criminal simbiótico, seleccionamos Rocinha, el cuartel general del ADA antes de la intervención de la UPP. Rocinha es la favela más grande de Brasil con más de 120,000 habitantes. Ubicada en la Zona Sur, es uno de los territorios más valiosos de Río. En el pasado, la favela fue controlada por el CV hasta que su líder, "Lulu da Rocinha", fue asesinado en 2004. Su muerte inició una guerra. Después de una intensa disputa por el poder, Nem asumió el control y estableció la paz formando una alianza con la facción rival de drogas, el ADA. Nem gobernó Rocinha hasta 2012, cuando se instaló la UPP. La intervención en Rocinha ocurrió sin que la policía disparara un solo tiro. Algunos incluso creen que Nem podría haber negociado su arresto.[11]

En un fascinante relato periodístico de la vida de Nem, Glenny (2015) describe los principios rectores del gobierno del señor de la droga: "Hay tres pilares sobre los cuales un líder efectivo construye su dominio: la reputación dentro de la comunidad; la aceptabilidad para la policía local; y la autoridad dentro de su organización" (p. 167). El traficante creía que controlar a sus soldados—hombres jóvenes con altos niveles de testosterona y ansiosos por mostrar músculo—era uno de los mayores desafíos de ser un traficante exitoso. El señor de la droga quería mantener una buena reputación con la comunidad. Nuestras primeras entrevistas en Rocinha tuvieron lugar algunos meses antes de la "pacificación". Una mujer explicó:

Estamos acostumbrados a ver el tráfico, las armas, ver a los traficantes caminando con paquetes de drogas … fumando marihuana, chicas jóvenes también involucrándose con ellos. Pero los "muchachos"—los llamamos muchachos porque crecimos con ellos—nos dejan en paz.

Nem también se dedicaba al bienestar social, asistiendo a los residentes con préstamos en efectivo, emergencias médicas y entierros. El señor de la droga también era un proveedor de justicia y sancionaba severamente el robo, la violación y la violencia doméstica. Algunos de nuestros informantes informaron que buscaban ayuda de los traficantes, mientras que otros preferían mantener distancia porque las sanciones podían ser severas.

Nem estableció una colaboración duradera con las instituciones de seguridad. La relación variaba desde sobornos, intercambio de información—por ejemplo, avisando a los traficantes de inminentes operaciones militares—hasta el intercambio de servicios. Nem contrataba a la policía para entrenar a sus hombres y ayudar directamente con invasiones armadas de otras favelas. La policía le prestaba armas automáticas y transporte de criminales en sus vehículos para

invadir otras favelas.[12] Además, Nem era famoso por tener en su nómina a jueces, fiscales y miembros de la Policía Civil encargados de las investigaciones.

La "pacificación" de Rocinha podría no haber tenido lugar si no hubiera sido por los eventos de agosto de 2010, cuando un grupo de traficantes de Rocinha mantuvo a turistas como rehenes en el Hotel Intercontinental, hasta que fueron instruidos por Nem a entregarse pacíficamente (Glenny 2015). La cercanía a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos dificultó que el gobierno justificara no apuntar a Rocinha para la pacificación. Nem fue arrestado fácilmente porque la Policía Civil había acumulado una gran cantidad de información sobre él. Aunque inicialmente se escondió en la comunidad, la policía lo arrestó.

Un mayor entrenado por el BOPE asumió el mando de la UPP. En una de nuestras visitas a la favela, lo entrevistamos y aprendimos de oficiales de policía y residentes que estaba cortando el negocio del traficante y estaba a punto de lanzar una gran operación antinarcóticos. Algunos meses después, fue implicado en la tortura y el asesinato del residente Amarildo de Souza. Una interpretación del escándalo de Amarildo es que los oficiales de policía que trabajaban en asociación con los traficantes dentro de Rocinha incriminaron al comandante de la UPP. El escándalo tuvo un gran impacto en socavar la legitimidad de la UPP.

La UPP vino a romper la paz que Nem había establecido. Los residentes se quejaron sistemáticamente de la proliferación del desorden, con ladrones, violadores, asaltantes y traficantes de drogas deambulando por las calles y sin responder a nadie. Además, los enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales dentro de Rocinha se volvieron frecuentes. Un residente se lamentó: "Hay balas volando por todas partes. Antes solo necesitabas evitar ciertas calles para estar seguro. Ahora ningún lugar es seguro". Otro residente informó: "vivimos con miedo, constreñidos, usted sabe, con miedo de ser blanco de los traficantes o de la policía. Así que nos encerramos, vivimos con miedo".

Sin la asistencia militar del estado y sin nadie al mando, la favela se volvió vulnerable a las invasiones de las facciones rivales de drogas. Después de una larga y sangrienta batalla, el CV pudo restablecer el control en 2018. La percepción general entre los residentes es que la UPP vino a deteriorar dramáticamente la seguridad en la favela.

Régimen Criminal Predatorio

El estado apuntó solo a una favela controlada por milicias, Batán, debido a un escándalo que involucró a un grupo de periodistas que los milicianos habían secuestrado y torturado (de Paula 2015). En 2008, los periodistas publicaron un

artículo que exponía a las milicias y su asociación con el estado. El secretario de seguridad de Río decidió reprimir a las milicias en Batán, instalando una unidad de la UPP en el área en 2009.

Batán es un barrio ubicado en el oeste de Río. Durante los años 2000, el territorio fue disputado intensamente entre el ADA y el TC, resultando en altos niveles de violencia hacia los residentes. Los patrones de abuso cambiaron cuando las milicias tomaron el control. Las milicias comenzaron a matar a cualquiera involucrado con los traficantes de drogas. Algunos residentes informaron sentirse satisfechos con las milicias y aprobaron los métodos empleados contra los traficantes. Pero muchos otros sintieron que los métodos eran innecesariamente despiadados. Un joven en Batán explicó:

Un chico estaba involucrado con el tráfico, usando drogas y haciendo mierda.... Fue atrapado por la milicia. Entonces lo tomaron, lo golpearon y lo ataron a un poste para que todos lo vieran. El chico murió, estuvo sin comida ni agua durante varios días.

Estos grupos de ejecución sumaria comenzaron a surgir en los años ochenta para "liberar" a las comunidades de las pandillas de drogas. Pero el objetivo principal de las milicias es establecer el control territorial para extraer recursos de la actividad económica local mediante la regulación de negocios, la distribución de tierras y los bienes raíces (Arias 2017). Además, las milicias cobran impuestos pesados no solo por seguridad sino también por servicios como agua y gas. Como resultado, muchos residentes sienten que su forma de gobierno es predatoria. Un hombre en Batán nos dijo:

Estás comprando pan en la tienda local y la milicia llega y dice "¿dónde está el dinero?" Vienen con pasamontañas, una polo negra, collar de plata u oro para cobrar su dinero. El gas ahora cuesta 50 reales en lugar de 30 porque la milicia solo permite que un residente lo venda.

Las milicias también están involucradas en el negocio del tráfico de armas, secuestros, "Jogo do Bicho", máquinas de níquel y cada vez más en el tráfico de drogas (Cano 2013). Debido a su estrecha asociación con la policía y el estado, las milicias pueden gobernar sus territorios con poca interferencia. Los defensores de las milicias argumentan que sin estos grupos de exterminio, las comunidades locales serían más vulnerables al crimen. De hecho, una visión común de las milicias es que combinan capacidad militar y violencia extralegal para imponer orden donde los estados no pueden (Dube y Naidu 2015; Jentzsch, Kalyvas y Schubiger 2015; Lyall 2010). Pero el hecho es que las milicias de Río están involucradas en serias violaciones de derechos humanos y se han convertido en

una gran amenaza para la seguridad pública. Se cree que están detrás del asesinato de la congresista Marielle Franco, una activista negra y gay de Maré. Solo dos oficiales de policía fueron arrestados, lo cual sugiere cuán profundo es el hampa criminal dirigido por ex funcionarios de justicia penal y milicias.

En nuestras entrevistas en Batán, encontramos aceptación de la UPP principalmente debido a cómo esta intervención contuvo el comportamiento abusivo de las milicias. Un joven explicó: "antes de que llegara la UPP, vivíamos aterrorizados de las milicias. Estas sospechaban de cualquiera que colaborara con el tráfico. Ejecutaban a muchas personas a sangre fría, cortaban sus partes del cuerpo con machetes, expulsaban a sus familias. Me siento más seguro con la UPP". Otro hombre explicó: "Había mucho conflicto aquí, muchas armas, y ya no vemos esto con la UPP". Una joven madre destacó que, con la UPP, su familia estaba mejor porque ahora "no tenían que pagar "todo" a la milicia".

Régimen Criminal Dividido

Maré es una gran área en el norte de Río, un territorio valioso ubicado en el corredor principal por donde las drogas y las armas llegan a la ciudad. El complejo tiene más de 140,000 habitantes. El CV y el TC compiten por el control, pero también están presentes las milicias, sometiendo a los residentes a violencia constante. La gobernanza criminal en Maré se caracteriza por regímenes micro-armados paralelos. Como explica Sousa Silva (2012), la frontera es un término que los residentes normalmente usan para referirse a las divisiones territoriales establecidas por las facciones de drogas. Los señores de la droga establecen formas de microgobernanza dentro de sus áreas y algunas de las reglas son similares a las de las favelas no disputadas—por ejemplo, los ladrones son severamente castigados, los señores de la droga proporcionan bienestar, resuelven conflictos y regulan rutinas básicas. Pero aquellos que viven bajo el control de una pandilla de drogas normalmente no se aventuran al otro lado. Un residente explicó por qué:

Cuando no conoces a los gobernantes de drogas y esas personas no te conocen a ti, hay sospecha. Para circular libremente necesitas conocer las normas del territorio. Si no las conoces, crea miedo. La frontera es donde termina una comunidad y comienza la otra.

Los residentes temen las invasiones de pandillas rivales porque los tiroteos aterrorizan a todos. Un activista social en Maré explicó que las escuelas están regularmente bloqueadas debido a los enfrentamientos armados. Nadie puede salir de sus casas y los niños están aterrorizados. La violencia es significativamente más intensa cerca de la frontera y algunas calles son incluso

conocidas por los lugareños como "Franjas de Gaza". Cuando una pandilla rival invade el territorio, no es raro que los criminales desalojen de sus casas o asesinen a residentes asociados con sus rivales de pandillas. Estas dinámicas resuenan con las áreas disputadas durante las guerras civiles (Kalyvas 2006).

Los regímenes Divididos también experimentan altos niveles de violencia policial. La PM de Río tiende a realizar significativamente más incursiones donde las pandillas rivales están luchando guerras territoriales. Usan armamento pesado y vehículos blindados de tropas (conocidos como el caveirão). Durante estas incursiones, la policía a menudo realiza acciones arbitrarias contra los residentes, incluyendo invasiones a hogares, palizas y asesinatos. En una de estas operaciones en Maré que tuvo lugar en 2013, un oficial de policía del BOPE fue asesinado. Un mes después, los oficiales de policía invadieron el área, entrando violentamente en numerosos hogares, torturando a los residentes y asesinando brutalmente a nueve residentes. Maré no recibió una UPP a pesar del hecho de que en 2014 hubo una ocupación militar que se suponía que debía crear las condiciones para "pacificar" el área. Las entrevistas con el Comandante General de las UPPs de Río en el momento de la intervención en Maré revelaron que el estado había perdido el compromiso con la reforma por razones a las que nos referiremos en la conclusión. Estas prácticas policiales violentas, a su vez, crean miedo a la policía. Un joven explicó:

Aprendemos a ver al oficial de policía como el villano, ¿sabe? Aquí, el tipo [policía] te cacheará, te golpeará, te abofeteará, harán estas cosas para que crees cierta resistencia hacia ellos.

Hay cinco consecuencias negativas de vivir en regímenes Divididos: (i) los residentes no pueden circular libremente; (ii) las comunidades están permanentemente divididas; (iii) alta frecuencia de tiroteos; (iv) altos niveles de víctimas fatales como resultado de las guerras territoriales entre pandillas, afectando particularmente a los hombres jóvenes; y (v) cuando ocurren invasiones, los residentes a menudo son desalojados de sus hogares y algunos ejecutados a sangre fría.

Debido a que no se instaló una UPP en Maré, también realizamos entrevistas y nuestra encuesta de gran N en Cidade de Deus, un grupo de favelas y proyectos de vivienda construidos en los años sesenta en la zona oeste. El área fue disputada por el CV y los paramilitares antes de la UPP. Tiroteos e invasiones intensos tuvieron lugar entre facciones rivales del CV que controlaban diferentes áreas. Las milicias también estaban presentes, usando estrategias como secuestro de traficantes, extorsión y ejecuciones sumarias. Se instaló una UPP en 2009 y la

violencia cayó dramáticamente. La aceptación comunitaria de la UPP, como revelaron nuestras primeras entrevistas allí, fue alta. Un hombre explicó:

El poder de los traficantes se debilitó con la UPP. Venden drogas… el tráfico continúa. Pero la UPP realmente redujo la violencia … ya no vemos armas, ni las barricadas que los traficantes usaban para evadir a la policía.

Desafortunadamente, las condiciones de seguridad en Cidade de Deus comenzaron a deteriorarse después de 2013. Muchos criminales de otras áreas se mudaron allí y, además, el CV colocó bombas en varias UPPs, incluyendo Cidade de Deus.[13] En el momento en que realizamos nuestra encuesta, la seguridad se estaba deteriorando, con un enfrentamiento armado en una de las áreas que nos obligó a suspender la recolección de datos durante un mes.

EVIDENCIA DEL ANÁLISIS DE TEXTO

El trabajo etnográfico nos permite entender los mecanismos y procesos del dominio criminal. Para generalizar más allá de nuestros casos, usamos análisis automatizado de textos usando datos para el universo completo de favelas "pacificadas". Usamos informes criminales recolectados por Disque Denúncia (DD). Las llamadas se relacionan con un amplio conjunto de temas que van desde quejas por ruido, homicidio y delitos menores hasta complots criminales mayores. DD garantiza que las llamadas no se graban ni se rastrean. Siguiendo a Grimmer y Stewart (2013), nos basamos en un método basado en reglas para clasificar cada llamada dentro de nuestra tipología de comportamiento criminal. Para obtener las palabras y frases clave asociadas con cada régimen, leímos cuidadosamente una muestra de llamadas provenientes de cada uno de los territorios que seleccionamos para nuestros estudios de caso.[14] Cada tema se define de la siguiente manera:

- Insurgencia: Estas palabras se relacionan con los regímenes en los que los grupos criminales confrontan violentamente al estado y, en particular, a la policía. El CV es la facción asociada con este tipo de comportamiento criminal. (Algunas de las frases clave incluyen las siguientes: matar a un policía [oficial], ofrecer dinero para matar oficiales, atentado terrorista y bomba).
- Bandidaje: Estas palabras se relacionan con nuestro Régimen Criminal Bandido en el que los GCOs se comportan violentamente hacia la población. El CV fuera de su cuartel general es la facción asociada con este tipo de comportamiento criminal. (Algunas de las frases incluyen

aterrorizar, muerte de residentes, amenaza a residentes, matar residentes, practicar barbaridades, expulsar residentes y ejecutar residentes).

- Colusión: Estas palabras se relacionan con nuestro escenario de Dominio Criminal Simbiótico en el que el GCO elige la corrupción y los sobornos por encima de la confrontación violenta con la policía. La facción criminal asociada con este tipo de comportamiento es el ADA. (Algunas frases y palabras clave incluyen soborno, recibir dinero, pagar a la policía, delatar a los traficantes, filtrar información y policía corrupta).
- Depredación: Estas palabras se relacionan con nuestro escenario de Régimen Predatorio donde el GCO extorsiona a la población exigiendo pagos directos a cambio de protección o servicios básicos. La facción criminal asociada con este tipo de comportamiento es la Milicia. (Algunas de las palabras incluyen extorsionar, extorsión, cobrar, cobrar por servicios y expulsar).
- Confrontación: Estas palabras se relacionan con nuestro escenario de Régimen Criminal Dividido en el que la confrontación entre grupos criminales resulta en un entorno dañino para la población. (Algunas de las palabras clave son residentes en pánico, terror, enfrentamientos armados, la favela será invadida e invasión planificada).

Usando estas tipologías, clasificamos cada llamada dentro de estos temas si menciona una de estas palabras o frases clave. Elegimos simplificar la clasificación con un indicador binario que toma el valor de uno si la llamada incluye uno de estos unigramas o frases clave, y cero en caso contrario. Debe notarse que una llamada particular podría referirse a uno o más comportamientos criminales simultáneamente. Esta superposición entre temas sigue los atributos de estas denuncias. Usualmente, las llamadas abordan más de un comportamiento criminal, ya que los GCOs a menudo están involucrados en varias actividades al mismo tiempo. En total, codificamos más de 40 frases clave y unigramas con todas sus variaciones gramaticales.

Esta clasificación se realizó para cada llamada proveniente de complejos de favelas[15] que tuvieron UPP en algún momento. Para cada uno de estos complejos de favelas, tenemos información proporcionada por la PM sobre el grupo que controlaba el territorio antes del tratamiento de la UPP. Luego corroboramos la información sobre el control territorial proporcionada por la PM con datos del DD, como se detalla en el Apéndice en línea, Sección A.3. Debido a que solo tenemos información sobre la facción que controlaba cada complejo de favelas específico justo antes de la intervención de la UPP, restringimos la ventana temporal a 24

meses antes de la intervención. En total, hay 3,706 llamadas que ocurrieron dentro de las favelas intervenidas por la UPP para este período de tiempo.

Para estimar la probabilidad de que una llamada particular pertenezca a una de las cinco categorías definidas anteriormente antes y después de la intervención de la UPP, calculamos el siguiente modelo lineal:

yi = bFactioni × UPPi + li + dt + g Modulei + «i (1)

Aquí, y es una variable binaria que toma el valor de 1 si la llamada i corresponde a una categoría particular (colusión, depredación, confrontación, insurgencia o bandidaje), y cero en caso contrario.[16] Por lo tanto, ejecutamos cinco modelos, uno para cada una de estas categorías. La variable Faction corresponde al grupo criminal que controla la favela específica antes de la intervención de la UPP. La categoría base son las favelas controladas por el CV fuera de Alemão (gobierno Bandido). UPP es una variable binaria que toma el valor de 1 después de la intervención. Además, controlamos por la ubicación de la llamada, es decir, el territorio particular de la UPP. También incluimos un efecto fijo por módulo, porque el conjunto de datos está dividido en 24 módulos predefinidos creados por el DD. Agrupamos los errores estándar a nivel de la UPP.

Nuestras expectativas teóricas son las siguientes. Primero, esperamos observar más violencia contra el estado en los territorios controlados por el CV y más colusión con el estado en los controlados por el ADA. Segundo, esperamos que el comportamiento del CV hacia la comunidad difiera entre los territorios que están dentro y fuera de su cuartel general. Aunque el CV cooperará más con la comunidad en el primero, victimizará cada vez más a los residentes en el segundo. Esperamos encontrar más llamadas que involucren extorsión en las áreas controladas por las milicias. Por último, se espera que las llamadas provenientes de áreas disputadas por varios grupos criminales involucren más amenazas de invasiones y enfrentamientos armados. Los resultados se presentan en la Figura 4. Todos los gráficos deben leerse en relación con la categoría omitida (favelas controladas por el CV fuera de Alemão).

Los resultados son los esperados. El CV se comporta significativamente más violentamente hacia el estado que el ADA, y el ADA colude con el estado más de lo que lo hace el CV. Importante, hay quejas más frecuentes sobre enfrentamientos armados con el estado en el régimen Bandido que en el Insurgente, lo que sugiere que los primeros son más vulnerables a las "invasiones" policiales que los segundos. Los resultados también muestran que el CV fuera de Alemão se comporta más de acuerdo con un régimen Bandido al aterrorizar a los ciudadanos. En contraste, el CV en Alemão y el ADA usan más moderación en su relación con

la población, lo que apoya nuestro argumento de que los regímenes Insurgente y Simbiótico colaboran con la comunidad. Los resultados también revelan que las Milicias se comportan de acuerdo con nuestra categoría Predatoria al extorsionar a los residentes. Curiosamente, también usan tanta violencia hacia la población como los regímenes Bandidos.[17] Debe notarse que la estrategia de integración de las milicias con el estado no es capturada por nuestra categoría de "colusión", que refleja la estrategia de "evasión del cumplimiento" usada por el ADA. Esto no es sorprendente, dado lo difícil que es para los residentes observar los acuerdos ocultos entre las milicias y los políticos que se forjan lejos de las favelas. Finalmente, de acuerdo con nuestra teoría, hay una mayor incidencia de invasiones violentas y enfrentamientos armados en los regímenes criminales Divididos que en los regímenes Insurgente y Simbiótico. Sorprendentemente, estos regímenes son menos abusivos hacia la población que los regímenes Bandido y Predatorio. Estos resultados dan credibilidad a nuestra tipología de regímenes criminales y a la clasificación de los GCOs de Río.

Dirigiendo las Intervenciones Policiales

Los patrones de confrontación y colusión GCO-estado determinan dónde dirige el estado sus intervenciones. La Tabla 1 informa qué facciones criminales controlaban el grupo de favelas tratadas por la UPP. La tabla también informa qué grupo criminal controlaba las áreas no pacificadas en 2008. Los datos sobre el dominio criminal fueron proporcionados por la PM.[18]

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de los Complejos de Favelas por Facción Criminal

Régimen criminal Complejos Favelas Población Complejos Favelas Población Complejos Favelas Población

Total UPP No UPP

Insurgente (CV-HQ) 8 22 163,994 8 22 163,994 — — —

Bandido (CV) 54 134 438,405 18 87 355,846 36 47 82,559

Simbiótico (ADA) 24 42 188,856 4 11 143,733 20 31 45,123

Predatorio (MIL) 50 112 256,643 1 4 26,085 49 108 230,558

Dividido 29 77 233,588 6 39 143,906 23 38 89,682

TCP 21 57 190,343 — — — 21 57 190,343

Desconocido 260 310 276,893 — — — 260 310 276,893

TOTAL 446 754 1,748,722 37 163 833,564 409 591 915,158

Nota: Estadísticas descriptivas a nivel de complejos de favelas por facción criminal. Un complexo corresponde a un grupo de favelas con fronteras comunes. Las favelas bajo el control del Terceiro Comando Puro o con gobernanza criminal desconocida no fueron parte del tratamiento de la UPP.

La UPP cubrió más de 160 favelas, lo que corresponde a más del 20% de las más de 700 favelas de Río. Alrededor de dos tercios de las UPPs fueron asignadas a áreas controladas por el CV, lo que incluye tanto los regímenes Insurgente como Bandido. Alrededor del 24% de las favelas en las que ocurrió la intervención corresponden a regímenes criminales Divididos. En contraste, solo el 7% y el 3% de las favelas tratadas fueron controladas por el ADA (Simbiótico) y las Milicias (Predatorio), respectivamente. Estos resultados dan credibilidad a nuestro argumento de que las represalias estatales se dirigen predominantemente contra los GCOs que tienen un historial de confrontación violenta con el estado. En contraste, el estado se abstiene principalmente de intervenir en los regímenes Simbióticos y, en este caso, prácticamente dejó intactos los regímenes Predatorios. Debe notarse que después de excluir las favelas para las que no tenemos información sobre el control, las milicias controlan el 25% de estos territorios.[19]

LOS EFECTOS HETEROGÉNEOS DE LAS INTERVENCIONES POLICIALES SOBRE LA VIOLENCIA LETAL

Nuestra teoría argumenta que el resultado de las intervenciones policiales está influenciado por el régimen criminal preexistente de tres maneras fundamentales: (1) determina dónde dirige el estado sus intervenciones, (2) influye si la intervención funciona para controlar el crimen común o si la violencia letal escala, y (3) afecta cómo la gobernanza criminal preexistente y el comportamiento policial moldean conjuntamente la aceptación comunitaria de la policía.

Estimando los Efectos de la UPP

Proporcionar evidencia causal sobre las consecuencias de la UPP requiere seleccionar un grupo de comparación adecuado. Desafortunadamente, no hay estadísticas criminales disponibles públicamente a nivel de favela. Por esta razón, dependemos de un esfuerzo minucioso para geocodificar manualmente más de

22,000 incidentes letales que ocurrieron entre 2005 y 2015. El Ministerio de Seguridad proporcionó los datos originales con las direcciones. La información disponible era solo para tiroteos policiales mortales y homicidios.[20]

Naturalmente, nuestra unidad de análisis corresponde a las áreas geográficas cubiertas por las UPPs. Estos límites fueron trazados para cubrir grupos de favelas (complejos) y también algunas áreas que conectan estas favelas. La Figura 2 muestra el mayor alcance territorial de la UPP en relación con las favelas. Para las áreas tratadas, calculamos los incidentes criminales que ocurrieron dentro de los límites de la UPP, que incluyen aquellos que caen dentro de las favelas así como aquellos fuera de sus límites pero dentro de las UPPs. Para construir un grupo de comparación significativo entre las áreas no tratadas,[21] calculamos los incidentes de violencia letal a nivel de complejo de favelas y también incluimos incidentes dentro de sus amortiguadores de 100 metros. Esta estrategia hace que las unidades no tratadas sean más comparables a las áreas de la UPP al replicar el mayor alcance geográfico del tratamiento de la UPP.

Efectos sobre la Violencia Letal

Nuestro enfoque de diferencia en diferencias explotará la variación temporal y espacial de la asignación de la UPP. Para medir el efecto de la UPP sobre la violencia letal, estimamos el siguiente modelo DID generalizado:

[yi,t = tBOPEi,t + dUPPi,t × Ri + g(Fi × t) + li + «i,t (2)

La variable dependiente de interés, yi,t, representa la tasa de crimen por 100,000 habitantes.[22] R representa el régimen criminal antes de la introducción de la UPP. El coeficiente de interés es d, que representa la interacción entre el tratamiento de la UPP y el tipo de régimen criminal. g representa la tendencia temporal específica de la unidad, y l es un efecto fijo de unidad. Agrupamos los errores estándar a nivel de complejos de favelas para dar cuenta de los patrones de correlación dentro de las unidades.[23]

La "pacificación" consistió en dos acciones no superpuestas: (i) la ocupación por el BOPE o las fuerzas armadas, usualmente teniendo lugar unos meses antes de la intervención de la UPP; y (ii) el establecimiento de una unidad de la UPP en el área. Por lo tanto, codificamos BOPEi,t como una variable binaria que toma el valor de 1 durante el período en el que el BOPE estuvo presente en la favela, y Post_UPPi,t como una variable binaria que toma el valor de 1 después de que se introdujo una UPP.

Un desafío para la estrategia empírica es que la violencia podría haber estado disminuyendo por razones no relacionadas con las UPPs, incluyendo un mejor

desempeño económico, la expansión de políticas sociales o los efectos de derrame de Bolsa Família, un programa expandido significativamente durante el gobierno de Lula da Silva (2003–11). Para controlar el declive general de la violencia en la región y a nivel local, introducimos efectos fijos temporales y tendencias temporales específicas de complejo. Este enfoque mitiga las preocupaciones sobre el sesgo de variable omitida y captura la alta variación mensual de estos resultados.

Tabla 2. Efectos Heterogéneos de la Intervención de la UPP sobre la Violencia Letal

Homicidios Asesinatos policiales Violencia letal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

UPP -0.344 -0.478 -1.134*** -1.418*** -1.479*** -1.896*** … … …

(0.254) (0.308) (0.309) (0.374) (0.445) (0.546)

UPP × insurgente 1.3681 1.994** 3.362***

(0.800) (0.661) (1.003)

UPP × simbiótico 1.478* 1.469** 2.946**

(0.721) (0.480) (0.906)

UPP × predatorio -0.489 1.723** 1.234

(0.812) (0.599) (0.986)

UPP × dividido -1.311* -0.651 -1.962

(0.639) (0.837) (1.203)

Complejo FE Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Tiempo FE Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Tendencia temporal unitaria Y Y Y Y Y Y Y Y Y

SE agrupados Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Observaciones 36,956 17,022 36,956 17,022 36,956 17,022 36,956 17,022 36,956

Unidades 286 134 286 134 286 134 286 134 286

R^2 ajustado 0.054 0.064 0.027 0.038 0.066 0.079 … … …

Nota: Regresiones para el período 2007–15 con el complejo-mes como unidad de análisis. Los complexos son grupos de favelas con fronteras comunes. Las variables dependientes están en tasas por 100,000 habitantes. La UPP toma el valor de uno después de que se introdujo la UPP. El orden criminal que sirve como nuestra categoría de referencia es Bandido. Todos los modelos incluyen una variable binaria para el período de invasión del BOPE, efectos fijos de unidad y tiempo, y tendencias temporales lineales específicas de complejo. Los errores estándar (entre paréntesis) están agrupados a nivel de complejo. La tasa mensual promedio de homicidios en la muestra es de 3.83, y la tasa mensual promedio de asesinatos policiales es de 1.23.

[1] $p < 0.1$; * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

Los resultados se presentan en la Tabla 2. Las columnas 1 y 3 muestran cómo la UPP moldeó los homicidios y los asesinatos policiales sin controlar por el régimen criminal. La columna 5 muestra cómo la UPP afectó la violencia letal, que es la suma de homicidios y asesinatos policiales. Los resultados demuestran que, en promedio, la UPP no redujo las tasas de homicidios. Sin embargo, la UPP tuvo un efecto sustancial en la reducción de los asesinatos por la policía. El tamaño de la estimación de la UPP para los asesinatos policiales es -1.13. Esto implica una reducción de 1.3 asesinatos policiales por 100,000 habitantes por mes. Con 164 favelas tratadas, estas estimaciones implican que hubo una reducción anual de alrededor de 133 asesinatos, lo que sugiere que la violencia policial disminuyó aproximadamente un 40%, gracias a la UPP.[24]

La Figura 5 presenta los efectos marginales de la UPP según el régimen criminal. Los resultados son consistentes con nuestras expectativas. La UPP redujo la violencia letal en los regímenes Bandido y Dividido. Relativo a estos, la UPP aumentó la violencia letal en los regímenes Insurgente y Simbiótico. En los regímenes criminales Predatorios, la UPP parece no tener efecto sobre la violencia letal.

Figura 5. Efectos Heterogéneos de las Intervenciones de la UPP sobre la Violencia Letal

Nota: Efectos marginales estimados de la UPP, con intervalos de confianza del 95% (por el método delta), basados en los modelos presentados en la Tabla 2.

Figura 6. Efectos Heterogéneos de las Intervenciones de la UPP sobre el Crimen Común

Nota: Efectos marginales estimados de la UPP, con intervalos de confianza del 95% (por el método delta), basados en los modelos presentados en la Tabla A.12 del Apéndice en línea.

En el Apéndice en línea A.10, presentamos estimaciones de diferencia en diferencias generalizadas para otros resultados delictivos, incluyendo extorsión, robo con allanamiento y oficiales asesinados en acción.[25] La Figura 6 grafica los efectos marginales de la UPP para estos resultados. Los resultados coinciden con nuestras expectativas: la UPP aumentó el crimen común como el robo con allanamiento en los regímenes Simbióticos. En los regímenes criminales Predatorios, disminuyó la extorsión y, sorprendentemente, también el robo con allanamiento, sugiriendo que las milicias en Batán no fueron tan efectivas para mantener el crimen bajo control. Un resultado intrigante es que la extorsión parece aumentar en casi todas partes, excepto en los regímenes Predatorios. Como predice nuestra teoría, la UPP aumentó el número de oficiales asesinados en los regímenes Insurgentes y también parece aumentar el robo con allanamiento, aunque su efecto marginal no es diferente de cero. El número de oficiales asesinados disminuyó en los regímenes Simbióticos. Por último, en el Apéndice en línea, también mostramos que la UPP está asociada con aumentos en las incautaciones de drogas independientemente del régimen criminal, probablemente reflejando el hecho de que una mayor presencia policial produce más oportunidades para incautar drogas.

Pruebas de Robustez

Realizamos varias pruebas de robustez. Primero, en la Sección A.7 del Apéndice en línea, examinamos los datos en busca de evidencia de tendencias no paralelas antes del inicio del programa de la UPP. Nuestros resultados sugieren que el supuesto de tendencias paralelas es válido para nuestra estrategia DID.

Podría argumentarse que el supuesto de tendencias paralelas podría ser problemático dado nuestro argumento de que los regímenes criminales están asociados con diferentes dinámicas de violencia.[26] Para abordar esta preocupación, en la Sección A.8 del Apéndice en línea, segmentamos el análisis por régimen criminal y explotamos la granularidad de los datos modelando los efectos de la UPP alrededor de sus fronteras. Nuestros grupos de comparación son aquellas áreas a lo largo de las fronteras de la UPP. En particular, observamos los incidentes de violencia letal en zonas de amortiguamiento de 100 metros dentro y 100 metros fuera de una UPP dada. Ejecutamos el análisis de diferencia en diferencias en diferentes submuestras de nuestra definición de regímenes criminales. Nuestros resultados son ampliamente consistentes con los resultados

principales que usan todos los complexos intervenidos y no intervenidos como unidades de análisis.

Además, la Sección A.9 del Apéndice en línea presenta pruebas placebo que mueven artificialmente la fecha de inauguración de cada UPP. Presentamos especificaciones alternativas que incluyen un rezago del tratamiento de la pacificación que toma el valor de 1 durante tres, seis o nueve meses antes de que comience realmente la intervención. Nuestros resultados muestran que ninguna de las variables rezagadas tiene un efecto significativo sobre los homicidios o los asesinatos por la policía, fortaleciendo así nuestra interpretación del efecto de la pacificación.

También controlamos en la Sección A.9 del Apéndice en línea por la implementación del Sistema de Metas, el sistema de pago por desempeño instituido en 2009 y luego expandido en 2011 para incorporar los asesinatos por la policía. Esta reforma cambió los incentivos para el comportamiento policial porque recibirían bonificaciones por reducir la violencia letal. Nuestros resultados son robustos. Otra posible objeción a nuestros resultados es que podrían estar impulsados por un caso particular. Por ejemplo, los resultados del ADA podrían estar impulsados enteramente por Rocinha, también la favela más grande de Río. Ejecutamos todos los modelos excluyendo una UPP a la vez, y todos los resultados permanecen sin cambios.

Legitimidad Policial

El último elemento de nuestro análisis se centra en la legitimidad policial. Realizamos una encuesta (N = 5,300) en varias favelas seleccionadas de acuerdo con nuestra tipología de regímenes criminales. Debido a que esta última sección trata sobre la legitimidad de la UPP, no incluimos las respuestas de la encuesta de Maré. Desafortunadamente, no fue posible realizar encuestas en Alemão debido a los enfrentamientos armados diarios que hacían demasiado arriesgado para los enumeradores. Para una descripción completa de la encuesta y la recolección de datos, ver el Apéndice en línea, Sección A.12.

La encuesta pidió a los residentes que evaluaran la UPP como se informa en la Tabla 3. Para el análisis, modelaremos primero las respuestas a la pregunta sobre si la UPP debería permanecer o salir de la favela. Esta es una evaluación sobre si es mejor tener una UPP o quedar bajo el gobierno de los GCOs. También agruparemos las respuestas a todas estas preguntas en un índice estandarizado compuesto de aceptabilidad de la UPP. Nuestro índice tiene un alfa de Cronbach de 0.74, revelando que la medida tiene consistencia interna.

Manteniendo constante el comportamiento policial, esperamos que la UPP tenga más legitimidad donde mejoró la seguridad local y el régimen criminal preexistente falló en proporcionar orden, como en los regímenes Dividido (Cidade de Deus), Bandido (Providência) y Predatorio (Batán). En contraste, donde la intervención policial deterioró la seguridad local y el régimen criminal preexistente proporcionó orden, como en los regímenes Simbióticos (Rocinha), esperamos que los residentes prefieran que la UPP salga de la favela. Los datos revelaron que significativamente más residentes en Batán (75%) y Cidade de Deus (56%) quieren que la UPP permanezca en su favela que en Providência (37%) y Rocinha (27%).

Tabla 3. Evaluaciones de la UPP

Sí (%) No (%) Parcialmente (%)

¿Fue positiva la UPP? 31 22 35

¿Mejoró la relación comunitaria con la policía? 23 27 50

¿Mejoró su vida y la de su familia? 28 10 62

¿Quiere que la UPP salga de su favela? 15 46 38

Figura 7. Evaluaciones Comunitarias de la UPP

Nota: Efectos marginales estimados basados en los modelos mostrados en la Tabla A.13 del Apéndice en línea. Intervalos de confianza del 95%. Las comunidades muestreadas en la encuesta son Batán (Predatorio), Cidade de Deus (Dividido), Providência (Bandido) y Rocinha (Simbiótico). Los modelos incluyen controles sociodemográficos. La línea vertical representa el valor promedio de la variable dependiente.

También esperamos que la victimización policial trabaje para disminuir la legitimidad de la UPP. Nuestra encuesta incluyó una batería de preguntas sobre la victimización a manos de la policía, que es muy alta. El 3% informó que "la policía les infligió daño físico", el 13% tuvo "sus hogares invadidos por oficiales de policía", y el 15% informó que un familiar o amigo había sido "asesinado por la policía".

Figura 7: La encuesta también preguntó si los crímenes comunes, los tiroteos, el uso ostensible de armas y la corrupción policial aumentaron o disminuyeron con la UPP. El deterioro de estas condiciones debería disminuir la aceptación comunitaria de la UPP.[27] Nuestra estrategia de modelado usa una regresión OLS. En el primer modelo sobre si la UPP debería salir o permanecer, la variable dependiente es una escala de 3 puntos.[28] En el segundo modelo, combinamos las

preguntas sobre la UPP informadas en la Tabla 3 en un índice que va desde -1 (menos favorable) hasta 3 (más favorable).[29]

La Figura 7 proporciona una representación visual de los hallazgos. Los resultados completos para ambos modelos se informan en el Apéndice en línea A. 12. Los residentes en nuestro régimen Dividido exhiben el mayor respaldo comunitario de la UPP, seguido por aquellos que viven bajo el dominio Predatorio y Bandido. Como se esperaba, la legitimidad policial en el régimen Simbiótico es muy baja.

Los resultados demuestran además que la victimización policial produce fuertes efectos negativos. Aquellos cuyos hogares fueron invadidos, sufrieron asalto físico, o tuvieron un familiar o amigo asesinado por la policía tienen más probabilidades de querer que la UPP salga y de tener evaluaciones negativas de la UPP, independientemente del régimen criminal. En contraste, las disminuciones en los conflictos armados entre los GCOs y la policía y del uso abierto de armas producen evaluaciones altamente favorables de la UPP. Los aumentos en crímenes como robo, hurto o violación aumentan el deseo de los residentes de querer que la UPP salga y producen evaluaciones más negativas, como predice nuestra teoría. De manera similar, cuando los residentes observan que aumentó la corrupción policial, las evaluaciones de la UPP son significativamente más negativas.

CONCLUSIÓN

Millones de personas en todo el mundo viven bajo el gobierno de organizaciones criminales. El hampa criminal es compleja y a menudo fluida, pero eso no significa que carezca de orden. Este artículo caracterizó cinco tipos de regímenes criminales—Insurgente, Bandido, Simbiótico, Predatorio y Dividido. Ofreció evidencia empírica de cómo los GCOs gobiernan sus territorios y cómo moldean comportamientos como la intimidación, la extorsión y el asesinato. El artículo también demostró cómo estos regímenes criminales influyen en dónde dirige el estado sus intervenciones policiales y si estas mejoran o deterioran la seguridad local.

Cambiar el control territorial requiere que la comunidad respalde al estado como el portador legítimo de la fuerza coercitiva. Pero eso no ocurrirá si los jefes criminales son más capaces que la policía para imponer el orden.

El artículo también contribuye a un importante debate de políticas sobre las tácticas de policiamiento. Los enfoques "militarizados" no solo someten a los residentes a tiroteos y terror constantes, sino que también trabajan para fortalecer el apoyo comunitario a los gobernantes criminales. Con el reciente giro

a la derecha en Brasil, los nuevos detentadores del poder han abrazado abiertamente la noción de que la PM debería, literalmente, exterminar a los "criminales". Una comprensión precisa de la UPP es por lo tanto más esencial que nunca. Destacamos particularmente que la UPP redujo el número de tiroteos policiales mortales en más del 40%. Además, en alrededor del 60% de los territorios en los que ocurrió la intervención, la UPP logró además reducir crímenes comunes como homicidios, extorsión y robos con allanamiento, y ganar la aceptación comunitaria. A pesar de sus logros, la UPP deterioró la seguridad pública en el 40% de los territorios en los que fue desplegada y no logró ganar legitimidad. Este artículo proporcionó una teoría para entender la variación en los resultados.

Es importante subrayar que este artículo se centró en los efectos locales de la UPP (por ejemplo, cómo afectó la seguridad pública dentro de las favelas). Pero la UPP también tuvo efectos de derrame. La Sección A.13 del Apéndice en línea demuestra que la UPP empujó a los GCOs a reubicarse fuera de las favelas, haciendo que el crimen y la violencia fueran más visibles para la clase media de Río y aumentando significativamente los desafíos para la PM de mantener el orden en la ciudad en su conjunto. Estos efectos de derrame jugaron un papel importante en socavar el compromiso del estado con la "pacificación". Además, el estado dejó a la policía prácticamente sola para lidiar con problemas de seguridad complejos que están profundamente interconectados con la pobreza, la segregación racial y la falta de oportunidades legales para los jóvenes en las favelas. El fracaso en expandir las políticas para promover el desarrollo socioeconómico y extender otros brazos del estado a las favelas trabajó además para socavar la capacidad del estado para recuperar el control territorial.

Nuestras conclusiones tienen implicaciones amplias más allá de Río e informan nuestra comprensión del dominio criminal, el conflicto y los procesos en curso de formación del estado. Las políticas de seguridad deberían basarse en una mejor comprensión de las micrológicas del dominio criminal. Donde los GCOs establecen relaciones "benignas" con la comunidad y proporcionan seguridad local, las intervenciones policiales pueden a menudo propagar el crimen y la violencia. En contraste, donde el dominio criminal es violento, tiránico o predatorio, las intervenciones policiales tienen más probabilidades de ser efectivas y ganar la aceptación comunitaria. El artículo argumentó que factores como los estilos de liderazgo y organizacionales, la fuerza de la comunidad, si los criminales son criados en el barrio y tienen lazos sociales con los residentes, y el control territorial juegan un papel en moldear cómo los GCOs se relacionan con la

comunidad. Dejamos para investigación futura una exploración más profunda de cómo cada uno de estos mecanismos moldea el comportamiento criminal.

Nuestro artículo también revela una variación importante en la naturaleza de los contratos ilícitos entre los GCOs y el estado. La literatura previa ha argumentado que las intervenciones de seguridad que buscan deshacer los pactos ilícitos entre los GCOs y el estado es lo que a menudo causa que la violencia escale. Pero nuestro artículo demuestra que este es solo el caso en los regímenes Simbióticos donde el GCO mantiene efectivamente el orden local. En los regímenes Predatorios, los GCOs operan en asociación con agentes estatales para extorsionar, secuestrar y extraer rentas de los habitantes. En nuestro enfoque, esto corresponde a uno de los regímenes criminales más tiránicos donde los GCOs tienen el pleno respaldo del estado para abusar de los derechos humanos. Reprimir estos regímenes predatorios debería ser una prioridad. Sin embargo, los estados rara vez dirigen sus intervenciones policiales considerando las dinámicas de seguridad local de las comunidades de bajos ingresos. Por el contrario, a menudo buscan proteger a los GCOs que forman asociaciones ilícitas con policías, jueces o funcionarios gubernamentales.

Por último, nuestro artículo hace explícito que el estado confronta un dilema de agencia con sus fuerzas policiales al intentar recuperar el control territorial de los GCOs. Las comunidades pobres a menudo tienden a experimentar a la policía como instrumentos de opresión. Cuando la policía y los sistemas públicos de justicia fallan a los pobres, no es sorprendente que los estados tendrán dificultades para extender sus tentáculos a estos territorios donde vastos sectores de la sociedad viven, gobernados por criminales.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Para ver el material suplementario de este artículo, por favor visite https://doi.org/10.1017/S0003055419000856.

Los archivos de replicación se pueden encontrar en Dataverse en: https://doi.org/10.7910/DVN/7PZHF6.

REFERENCIAS

Amorim, Carlos. 1993. Comando Vermelho. Rio de Janeiro: Editora Record.

Amorim, Carlos. 2003. CV-PCC: A Irmandade Do Crime. São Paulo: Editora Record.

Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Arias, Enrique Desmond, and Corinne Davis Rodrigues. 2006. "The Myth of Personal Security: Criminal Gangs, Dispute Resolution, and Identity in Rio de Janeiro's Favelas." Latin American Politics and Society 48 (4): 53-81.

Arjona, Ana. 2017. "Civilian Cooperation and Non-Cooperation with Non-State Armed Groups: The Centrality of Obedience and Resistance." Small Wars and Insurgencies 28 (4-5): 755-78.

Bailey, John, and Lucía Dammert. 2005. Public Security and Police Reform in the Americas. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Barnes, Nicholas. 2017. "Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence." Perspectives on Politics 15 (4): 967-87.

Beltrame, José Mariano. 2014. Todo Dia É Segunda-Feira. Rio de Janeiro: Sextante.

Brinks, Daniel M. 2007. The Judicial Response to Police Killings in Latin America: Inequality and the Rule of Law. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Calderón, Gabriela, Gustavo Robles, Alberto Díaz-Cayeros, and Beatriz Magaloni. 2015. "The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico." Journal of Conflict Resolution 59 (8): 1455-85.

Cano, Ignacio. 2013. "7.1 Violence and Organized Crime in Brazil: The Case of 'Militias' in Rio de Janeiro." In Transnational Organized Crime, eds. Heinrich-Böll Stiftung and Regine Schönenberg. Kordula Röckenhaus: Deutsche Nationalbibliothek, Bielefeld, 179-88.

da Silva Lima, William. 2001. Quatrocentos contra um: uma história do Comando Vermelho. Rio de Janeiro: Labortexto Editorial.

Dammert, Lucía, and Mary Fran T. Malone. 2006. "Does it Take a Village? Policing Strategies and Fear of Crime in Latin America." Latin American Politics and Society 48 (4): 27-51.

de Paula, Luciana Araujo. 2015. "The 'Grey Zones' of Democracy in Brazil: The 'Militia' Phenomenon and Contemporary Security Issues in Rio de Janeiro." Justice spatiale—Spatial justice, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR LAVUE 7218, Laboratoire Mosaïques, Authoritarian spaces, (un)just spaces? 8, http://www.jssj.org/article/les-zones-grises-de-la-democratie-bresilienne-

lephenomene-des-milices-et-les-enjeux-securitaires-contemporains-a-rio-de-janeiro/. ffhalshs-01508806f.

Dell, Melissa. 2015. "Trafficking Networks and the Mexican Drug War." The American Economic Review 105 (6): 1738-79.

Dowdney, Luke. 2005. Neither War Nor Peace. International Comparisons of Children and Youth in Organized Armed Violence. Rio de Janeiro: Viva Rio ISER (Instituto de Estudos da Religião) IANSA (International Action Network on Small Arms).

Dube, Oeindrila, and Suresh Naidu. 2015. "Bases, Bullets, and Ballots: The Effect of US Military Aid on Political Conflict in Colombia." The Journal of Politics 77 (1): 249-67.

Durán-Martínez, Angelica. 2015. "To Kill and Tell? State Power, Criminal Competition, and Drug Violence." Journal of Conflict Resolution 59 (8): 1377-402.

Frühling, Hugo. 2007. "The Impact of International Models of Policing in Latin America: The Case of Community Policing." Police Practice and Research 8 (2): 125-44.

Gambetta, Diego. 1996. The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Glenny, Misha. 2015. Nemesis: One Man and the Battle for Rio. House of Anansi.

Grimmer, Justin, and Brandon M. Stewart. 2013. "Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts." Political Analysis 21 (3): 267-97.

Haugen, Gary A., and Victor Boutros. 2015. The Locust Effect: Why the End of Poverty Requires the End of Violence. Oxford: Oxford University Press.

Hidalgo, Daniel, and Benjamin Lessing. 2015. "Endogenous State Weakness in Violent Democracies: Paramilitaries at the Polls." In Working Papers, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA: Google Scholar Article Location.

Holston, James. 2009. Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hough, Mike, Jonathan Jackson, Ben Bradford, Andy Myhill, and Paul Quinton. 2010. "Procedural justice, trust, and institutional legitimacy." Policing: a journal of policy and practice 4 (3): 203-10.

Jentzsch, Corinna, Stathis N. Kalyvas, and Livia Isabella Schubiger. 2015. "Militias in Civil Wars." Journal of Conflict Resolution 59 (5): 755-69.

Kalyvas, Stathis N. 2006. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Killebrew, Robert. 2011. "Criminal Insurgency in the Americas and beyond." Prism 2 (3): 33-52.

Lessing, Benjamin. 2015. "Logics of Violence in Criminal War." Journal of Conflict Resolution 59 (8): 1486-516.

Lessing, Benjamin, and Graham Denyer Willis. 2019. "Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug empire from behind Bars." American Political Science Review 113 (2): 584-606.

Lyall, Jason. 2010. "Are Coethnics More Effective Counter-insurgents? Evidence from the Second Chechen War." American Political Science Review 104 (1): 1-20.

Magaloni, Beatriz, Gustavo Robles, Aila M. Matanock, Alberto Diaz-Cayeros, and Vidal Romero. 2019. "Living in Fear: The Dynamics of Extortion in Mexico's Drug War." Comparative Political Studies Published online October 29, 2019. doi: 10.1177/0010414019879958.

Mampilly, Zachariah Cherian. 2011. Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Metelits, Claire M. 2009. "The Consequences of Rivalry: Explaining Insurgent Violence Using Fuzzy Sets." Political Research Quarterly 62 (4): 673-84.

Miraglia, Paula. 2015. Drugs and Drug Trafficking in Brazil: Trends and Policies. Washington, DC: Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative.

Moncada, Eduardo. 2013a. "Business and the Politics of Urban Violence in Colombia." Studies in Comparative International Development 48 (3): 308-30.

Moncada, Eduardo. 2013b. "The Politics of Urban Violence: Challenges for Development in the Global South." Studies in Comparative International Development 48 (3): 217-39.

Olson, Mancur. 1993. "Dictatorship, Democracy, and Development." American Political Science Review 87 (3): 567-76.

Penglase, Ben. 2008. "The Bastard Child of the Dictatorship: The Comando Vermelho and the Birth of 'Narco-Culture' in Rio de Janeiro." Luso-Brazilian Review 45 (1): 118-45.

Perlman, Janice E. 2005. "The Myth of Marginality Revisited: The Case of Favelas in Rio de Janeiro." In Becoming Global and the New Poverty of Cities. Berkeley: University of California Press.

Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant. California: Berkeley University Press.

Riccio, Vicente, Marco Aurélio Ruediger, Steven Dutt Ross, and Wesley Skogan. 2013. "Community Policing in the Favelas of Rio de Janeiro." Police Practice and Research 14 (4): 308-18.

Snyder, Richard, and Angelica Durán-Martínez. 2009. "Does Illegality Breed Violence? Drug Trafficking and State-Sponsored Protection Rackets." Crime, Law and Social Change 52 (3): 253-73.

Sousa Silva, Eliana. 2012. Testemunhos da Mare. Rio de Janeiro: Aeroplano.

Staniland, Paul. 2012. "States, Insurgents, and Wartime Political Orders." Perspectives on Politics 10 (2): 243-64.

Sullivan, John P. 2000. "Urban Gangs Evolving as Criminal Netwar Actors." Small Wars and Insurgencies 11 (1): 82-96.

Trejo, Guillermo, and Sandra Ley. 2018. "Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico?" Comparative Political Studies 51 (7): 900-37.

Tyler, Tom R. 1988. "What Is Procedural Justice? Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures." Law & Society Review, 103-35.

Nota del traductor: Esta es una traducción no oficial al español de un artículo académico, elaborada por asistente de IA para fines de estudio e investigación de una tesis doctoral no comercial. La obra original se reproduce con atribución; consulte el DOI y la fuente citadas para la versión canónica. Autor y editorial conservan todos los derechos sobre el original.